



REPÚBLICA ARGENTINA

# VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

**REUNIÓN PLENARIA DE LAS COMISIONES DE MINERÍA, ENERGÍA Y  
COMBUSTIBLES Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA**

Salón Azul – H. Senado de la Nación

**19 de marzo de 2014**

**Presidencia de los señores senadores Guillermo Juan Pereyra y Aníbal Fernández**

PUBLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

– En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Azul del H. Senado de la Nación<sup>1</sup>, a las 12 y 25 del miércoles 19 de marzo de 2014:

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Buenos días. Vamos a continuar con la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustible y de Presupuesto y Hacienda. Tenemos el quórum necesario para poder sesionar.

Hoy vamos a escuchar, en primer término, al ingeniero Calleja, que es propuesto por el Partido Justicialista, por el senador Giustiniani... Perdón, por el Partido Socialista. Agradezca, senador: lo hicimos peronista en un acto de error. *(Risas.)*

Después vamos a tener una exposición de ASSUPA, que la Asociación de Superficiarios de la Patagonia. Vamos a escuchar al doctor Mertehikian, como apoderado de esta asociación. Quiero aclarar que esta nota ingresó en el día de hoy a la Comisión de Energía, pero de la misma manera le vamos a dar la palabra para que pueda exponer.

Tiene la palabra el ingeniero Calleja.

**Sr. Calleja.** – Buenos días. Gracias a los señores legisladores por la invitación. Soy contador público, no soy ingeniero. Muchas gracias al senador Giustiniani por la invitación.

Dentro del tiempo disponible y de lo que he podido ver –he leído el proyecto de ley y las declaraciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo–, mi opinión es contraria. La voy a dividir en dos partes. La parte más importante es por qué pagamos 5000 millones de dólares, que es una discusión teórica, una discusión que después se quiere justificar con algo que habría que estudiar detenidamente, que es la forma de valuación, que no me convence.

Vale la pena hacer un poco de historia. ¿Por qué cambian la postura de Repsol y del gobierno de España? ¿Dónde pienso yo que se equivoca el gobierno? En la anterior presidencia de México –creo que era la de Calderón–, cobra un rol importante una empresa llamada Halliburton, manejada por Dick Cheney, que es uno de los padres de la Guerra del Golfo y que tiene un montón de problemas en Estados Unidos: se retiró de las empresas y siguió cobrando por debajo de la mesa. Es una empresa muy mal considerada –espero que no esté trabajando en la Argentina–. Le banca la campaña con muchos millones de dólares al candidato a presidente que sale electo. ¿Cuál es el pago? El pago es la apertura del sector del petróleo. Se trata de la apertura de una empresa que es, en cierto modo, hija de Enrique Mosconi. Cuando Enrique Mosconi viaja, siendo presidente Alvear, por toda América, recorre, entre otros lugares, México, donde es un héroe y se estudia. Uno de sus discípulos es Lázaro Cárdenas, quien fue presidente y anuló las concesiones de empresas norteamericanas, gozando del beneplácito y el apoyo a dicha anulación del presidente Roosevelt en cuanto al pago, y creó Pemex.

México es una potencia petrolera que tiene lo mismo que teníamos nosotros con YPF: teníamos un Estado que vivía de YPF a través de impuestos específicos sobre los combustibles. Allí pasa lo mismo: tienen yacimientos viejos. Ahora viene Peña Nieto, quien consigue en un plebiscito, con la oposición en contra –dentro de ella, los partidarios de Lázaro Cárdenas–, abrir el sector petrolero. Van a hacer lo mismo que se hizo en el año 1995 con YPF, pero con Pemex. Y en Pemex van a participar todos, especialmente las grandes empresas norteamericanas: ExxonMobil; Chevron-Texaco; Shell, por supuesto, y también las menores, entre las cuales está Repsol. Este va a ser el gran negocio.

La Agencia Internacional de la Energía, que es un organismo que depende del gobierno de los Estados Unidos y que dibuja los datos de acuerdo a lo que quieren las

<sup>1</sup> Se deja constancia de que los faltantes en la Versión Taquigráfica obedecen a problemas de audio durante la reunión.

petroleras –no es un organismo independiente–, dice que los mexicanos tienen muy buenas reservas, tanto convencionales como no convencionales. Va a haber una gran exploración en el Golfo, va a ser el boom petrolero de estos años, y de ella van a participar todos los privados. Se va a abrir Pemex, que era un monopolio constitucional. Esto ha sido público: Pemex es uno de los grandes accionistas que tiene Repsol; tiene el 11 por ciento del capital. Así como Slim, amigo del presidente de México, tiene el 8 por ciento, creo, del capital de YPF SA.

El señor Brufau se dedicó, en su momento, a perseguir a YPF Sociedad Anónima en cuanto foro pudiera. Como no nos fuimos del CIADI –no entiendo por qué nunca lo hicimos–, sigue dando vueltas; nos presentó un montón de demandas. A propósito de esto, yo leía que el ingeniero Galuccio había hablado con el presidente de Pemex para que participara en estos planes piloto, como el de Chevron en Vaca Muerta. Brufau, que ya estaba en la mira por algunos manejos que no le gustaban a Pemex –accionista importante de Repsol–, lo llama y le dice: "Acá, esto no va. Si vos querés participar con YPF y querés participar en las riquezas de México, acá no venís. A México no venís; tenés que arreglar con la Argentina". Ahí se produce un cambio espectacular: cambian los jefes de Brufau y cambia el gobierno español. Este es el tema. Cambia Soria, que había sido el que más nos había agraviado al momento en que los argentinos decidimos expropiar la empresa. Entonces, si quieren participar en México, tienen que arreglar con la Argentina. Es decir, estaban prácticamente en la lona para negociar.

Piensen ustedes que lo que le va a dar, 5000 millones, no es mucho como cifra para estos negocios, pero es mucho para la Argentina. Repsol, cuando vino a una YPF que ya estaba privatizada y en manos de los fondos de pensión de los Estados Unidos, se llevó, en 5 años, 15.000 millones de dólares. El TIR –la Tasa Interna de Retorno– fue de las más grandes del mundo. En ese momento, el gobierno argentino negocia mal, porque Repsol se quería ir desde hacía rato de la Argentina. Giraba utilidades que no eran líquidas, violando el artículo 300 del Código Penal. El pacto con el experto en mercados regulados, Eskenazi, les permitía girar en forma indiscriminada.

Pero lo de México es mucho más grande. Si nosotros nos hubiéramos plantado, es decir, "si te querés ir a México, acá tenés que arreglar distinto", yo creo que hubieran arreglado por mucho menos y hubiera sido un precio comercial. Creo que se equivoca el gobierno: este negocio lo hace mal, como hizo mal al momento de la expropiación, que recibimos todo un conjunto de agravios por parte del gobierno español. Lo que allí hicimos fue apuntar a pelearnos con Repsol, que no tenía espalda, porque sus espaldas eran los yacimientos que podían tener acá, y le estábamos sacando todo. Por mal o bien, creo que Galuccio cometió un montón de errores; pero creo que los fondos que tomaban el camino del mar –en términos de Enrique Mosconi– se quedaron acá en ese momento. Después, hay muchas cosas para criticar. Si hay tiempo, lo vamos a decir.

En ese momento tendríamos que haber negociado con el gobierno de España. Es más o menos que lo pasó cuando a Enrique Mosconi, en el gobierno de Alvear, se le ocurrió armar la destilería de La Plata, y va a Estados Unidos –después anduvo por México– y contrata a una empresa con la cual hace la destilería. Pero en ese momento había en la Argentina una gran empresa, que era la Royal Dutch, que se oponía. Lo que hizo el ministro Le Bretón, que era el jefe de Mosconi ya que era el ministro de Agricultura, fue reunir a todas las empresas inglesas y decirles: "Si éstos siguen molestando, todos ustedes, que tienen los bancos, los ferrocarriles, los tranvías, los frigoríficos, van tener problemas". Las mismas empresas se ocuparon de decirle a la Shell: "No moleste más". La refinería se terminó en un año y medio y sigue siendo el gran orgullo de los argentinos. En un año y medio, y seguimos teniendo una

refinería que sigue siendo de las más grandes de América.

Creo que el gobierno se equivocó en negociar en aquel momento y se equivocó en negociar ahora. Este es un poco el tema. Yo creo que hubiera pagado mucho menos, pero mucho menos, y creo que hubieran aceptado el arreglo.

Después, en cuanto al arreglo en sí, hay una cosa que no me quedó clara y me preocupa. Hay un trabajo de Claudio Lozano que es muy bueno, que dice que si venden los títulos y bajan, salimos a responder. Ojalá yo esté equivocado, pero eso –creo que también lo dijo Pino ayer– me parece realmente peligroso. Es decir, creo que nos hemos equivocado en este tema. Esa es la opinión.

Por otro lado, uno tiene que ver dónde está políticamente ubicado. Esta YPF está ubicada... no gira, es decir, los fondos quedan en la Argentina. Tiene serios problemas en el manejo empresario, especialmente en la refinería. Yo soy platense; soy un sobreviviente de la inundación del 2 de abril, donde se produjo un incendio muy grande en la refinería y se quemó un horno de coque de los años cincuenta. Porque la refinería, desde la época del gran depredador de YPF, que se llama José Estenssoro, no tiene brigada contra incendio. Hace 15 días se vuelve a probar un incendio y no tiene brigadas contra incendio. Yo trabajé 15 años al frente de la refinería; trabajé en Petroquímica Mosconi. Soy contador; cumplía las órdenes que me daban los ingenieros. Había turnos en Mosconi de 12 miembros y turnos en YPF de 40 o 50 miembros, y estaba prohibido el ingreso de bomberos de Berisso, que son de los mejores del país, o de Ensenada. Bueno, no está; sigue igual que cuando Estenssoro echó a 4500 trabajadores de la refinería de La Plata y despidió a todos los integrantes de la brigada contra incendios. No están. Entonces, apagan el incendio los que en aquel momento tenían la entrada prohibida, que son los bomberos voluntarios. Yo lo vi a Galuccio, en mayo del año pasado, agradecer a todas las dotaciones de bomberos de toda la provincia de Buenos Aires, que lo habían ayudado a pagar el incendio. El otro día lo volvieron a hacer.

Entonces, a la refinería de La Plata le falta. No es que yo invente esto como contador público; lo digo porque hablo con los que manejaban la refinería, que son de primera –como es el caso del ingeniero Tagliabúe, que es una historia dentro de YPF, entre otros–, y me dicen que esto es lo que no anda bien.

Es decir que uno ve que Galuccio ya tiene esta relación con Halliburton, y también la tiene con Chevron. El arreglo con Chevron es un arreglo que no haría porque Chevron me molesta, ya que es la Standard Oil de California, la que firmó con Perón el convenio que después incluso provocó una ruptura dentro del peronismo. Es la de Condoleezza Rice, que tiene un barco en Chevron. Y también estuvo en el Golfo. Parece que Galuccio elige siempre a alguien que tuvo algo que ver en el Golfo. Y esa empresa es tan, pero tan mal considerada como para hacer un convenio, que hasta además parece que estamos creando empresas en Delaware, como si fuéramos...

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Contador Calleja: su tiempo ha expirado. Vaya redondeando, por favor.

**Sr. Callejas.** – Está bien.

Yo les agradezco de vuelta. Les pido que reflexionemos sobre este convenio. Podríamos haber negociado mejor. No vayamos para adelante. Los teníamos de rodillas, creo, a los españoles.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Gracias, contador.

Tiene la palabra el señor senador Urtubey

**Sr. Urtubey.** – Buenos días, señor contador.

La verdad es que estoy sorprendido por esta primera intervención. Yo creía –con todo respeto se lo digo– que usted venía a hablar según su arte, su ciencia o su experiencia para

analizar este convenio. Sin embargo, hemos escuchado una serie de apreciaciones políticas interesantes, de supuestas conversaciones de alto nivel de Pemex con presidentes, con candidatos a presidente norteamericanos. Realmente, no hemos escuchado nada del convenio.

La verdad es que encantado haría una charla con usted. Podemos ir a almorzar al comedor y hablar de política, de geopolítica, del destino del capitalismo financiero internacional, de la energía y de todo lo demás. Pero realmente me parece que lo que nosotros esperábamos acá, justamente, es alguna reflexión que tuviera que ver con su arte, con su ciencia, que sin dudas no la discuto en absoluto. No obstante, respecto al convenio usted dijo dos cosas: primero, "no me parece mucho lo que se pagó"; y después, "pero es mucho para la Argentina". En cuanto a la valuación, dijo: "me queda alguna duda"; pero no explicó cuáles son las dudas; cuál es la valuación correcta; cuál es su crítica sobre los métodos de valuación utilizados; en reemplazo de ese método de valuación, cuáles debieron haberse utilizado en cuenta de lo que usted considera deficientes; ni nos hizo una cuenta mínima utilizando los criterios de valuación que usted considera que son adecuados. Nada de esto pasó acá en esta primera intervención.

Yo quería hacer esta reflexión. No sé si Peña Nieto va a abrir Pemex a la inversión extranjera. Si lo hace, me parece una medida extraordinariamente lúcida de Peña Nieto para asegurar que México tenga la inyección de capitales que necesita para esos yacimientos. Usted habló del impuesto a los combustibles, pero yo no creo que con el impuesto a los combustibles se pueda conseguir la tamaño inversión que hace falta en la Argentina para poner a producir las reservas que tiene nuestro país.

**Sr. Presidente (Pereyra).** – Gracias, senador.

**Sr. Callejas.** – ¿Puedo contestar?

**Sr. Presidente (Pereyra).** – Sí.

**Sr. Callejas.** – En cuanto a la valuación, yo he leído el informe de la gente del Tribunal y me parece que lo hubiera hecho distinto. Pero no puedo en un día o dos días armar una tasación distinta y decir que yo hubiera aplicado otro método. Hubiera aplicado métodos de valores presupuestarios. Hubiera necesitado más tiempo; no puedo inventar.

Lo que yo hago es contar, en base a mi experiencia política, una situación internacional que creo que era más propicia para negociar otra cosa. Por ejemplo, confieso que tengo dudas –se las voy a hacer llegar al senador– con respecto al paquete complementario. Es decir, yo he leído lo que han hablado aquí, lo que ha presentado el senador Pereyra y lo que han hablado ustedes, y me quedan esas dudas. Entonces, las manifiesto y digo que yo hubiera negociado distinto.

A lo mejor hubiera valuado distinto, pero para poder trabajar en serio necesito ver papeles, necesito valorarlo. Es decir, los contadores somos técnicos en valuación y usamos varios procedimientos; los economistas también. Pero lo que necesito es tiempo. Pero lo que necesito es tiempo. Si esto es una carrera, yo no puedo. En principio –y he sido muy claro con los profesionales que han trabajado del Tribunal– han hecho una valuación de 5 mil millones de dólares. No me convence. Pero tampoco puedo acusarlos si no tengo un papelito.

Ahora bien, respecto a lo demás, todo es convenio de Chevron y a mí no me convence. Voy a tomar las palabras de Oscar Vicente, con quien no comparto nada, pero dice: "Son pozos piloto". Yo creo lo mismo: Chevron en Vaca Muerta son pozos piloto. Entonces, no nos creamos que tenemos la salvación porque hay muchas cosas. El tema de la refinería es una realidad, y yo lo veo. El tema de que YPF haya mejorado. La única que mejoró el aumento de la producción de crudo y gas fue YPF, los demás la bajan.

**Sr. Presidente (Pereyra).** – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – Contador, respetando además su trayectoria en la YPF estatal, usted bien dijo



que 5 mil millones en materia petrolera no es una suma significativa. Además, recordando también que Chevron en 1.5 de toda el área de Vaca Muerta está invirtiendo 1.200 millones de dólares, ¿qué opinión tiene sobre la potencialidad de YPF recuperada con control estatal, con el 51 por ciento, y con el complejo Vaca Muerta con una gran potencialidad? ¿Usted considera que es necesaria la inversión privada? ¿El Estado nacional puede desarrollarla solo?

Me gustaría conocer este tema porque me parece importante.

**Sr. Calleja.** – El tema de Vaca Muerta con la inversión de Chevron es una inversión menor, con un convenio que no se conoce en su totalidad.

Estaba comentándole al senador Giustiniani que aparecen tres o cuatro empresas creadas por YPF que tienen que ver con Chevron, De hecho, manejadas por el mismo abogado de Chevron. Me parece que es demasiado el optimismo que existe con el *fracking* en Neuquén.

He visto que Neuquén está muy contaminado con la explotación tradicional y vamos a meterle *fracking* cuando hay una cantidad de millones de litros por día que no se sabe dónde van. Y a mí me preocupa. También me preocupa, por ejemplo, que Entre Ríos haya tenido que parar ante la Justicia operaciones de *fracking* cerca de Federación.

El único lugar que veo que se ha desarrollado el *fracking* es en el noroeste de Estados Unidos y el suroeste de Canadá. Y esas eran zonas –tuve oportunidad de conocer–donde convivía la agricultura y la ganadería con el petróleo. Hoy ya no conviven.

Entonces, hay comunidades que estaban en las áreas de Apache que están muy preocupadas por la gran contaminación que existe. Entonces, hay que determinar cuánto hay, hay que determinar a qué profundidad están, hay que determinar cuánto va a costar sacarlo y hay que determinar cuál es el daño que voy a producir. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa. La preocupación que existe en este momento de muchos amigos es esa. Ojalá acierte, pero eso lo veremos. Yo cito a Oscar Vicente, dice: “Son pozos piloto”.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Disculpeme, pero desde la experiencia le quiero hacer una pregunta.

El *fracking* sabemos que se produce en una profundidad determinada, aproximadamente entre mil metros de profundidad, que los pozos son sellados, que las napas freáticas a la mayor profundidad que la podemos encontrar son 400 o 450 metros y acá estamos hablando de 3.000 metros. El *fracking* utiliza arriba del 95 por ciento de agua, el resto es la arena, 4 y algo, y por supuesto un porcentaje muy bajo son aditivos, que tampoco se ha comprobado que sean contaminantes.

Ahora bien, ¿qué le hace pensar a usted de que el *fracking* contamina teniendo todas estas precauciones? Concluyo, el agua es recuperada y tratada como corresponde, y reinyectada inclusive para la recuperación secundaria en otros yacimientos. ¿Qué le hace pensar a usted que esto contamina?

**Sr. Calleja.** – Yo ya llevo varios años con los petroleros. El señor que más sabía de los petroleros en el mundo trabajó con el presidente Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Harold Ickes. El petróleo y el abastecimiento de las tropas aliadas fue en manos de este hombre, que trataba con la gente de la Shell, que era Nazi, Rockefeller más o menos, y hubo la famosa pelea entre Eisenhower con Montgomery y Patton. Y siempre decía una cosa: “El día que aparezca un petrolero honesto, va al libro Guinness”. Yo todos los petroleros que conozco, no hay ninguno que sea honesto. No hay ninguno que sea honesto.

Entonces, de lo que me dice usted, senador, tengo que decirle primero que el informe que tengo es que vamos más abajo. El informe que tengo es que son 600 millones de litros por día que no se sabe dónde van. Entonces, eso me preocupa realmente. Y no sé la

formación que tienen.

Me van a decir: "Calleja, usted es un estadista enloquecido", pero no, cito al padre de las privatizaciones, a Oscar Vicente. Pugilioni dice más o menos lo mismo. Es decir que no les creo nada. Y yo he dicho públicamente que ojalá Galuccio haga un estudio profesional e independiente. Yo le recomendaba siempre que fuera a la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde estudiaron Mosconi, entre otros. Hay un instituto creado por la segunda presidencia de Yrigoyen, cuando era Ricardo Rojas el presidente y el Mosconi el vicepresidente, "Vaya ahí, busque un informe independiente, después va a andar dando vueltas y va a conseguir mejores empresas que Chevron". Por eso yo tengo una discrepancia con usted, senador.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Perdóneme, pero yo discrepo primero con usted porque no me respondió la pregunta: ¿qué le hace pensar a usted que esto contamina? Usted me habló de los 6 millones de litros de agua, que comparto plenamente, y todo el tratamiento que se le da del agua, reinyectar nuevamente los yacimientos, las distintas operaciones que se van realizando.

Tengo una interrupción del senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – 30 segundos. Solamente para recordar que en este Senado hay un proyecto de ley de presupuestos mínimos ambientales para la explotación de hidrocarburos no convencionales. Espero que con este principio de debate. Al margen de la autoría, es el único que está en el Congreso, sería una buena oportunidad para que el Senado abriera el debate, porque este es el tema central del futuro.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – A mí siempre me gusta reflexionar sobre la Argentina de las almas puras, de las almas bellas. La condenada a la pobreza irremediable, al fracaso y a la frustración de no tener los insumos para que la industria se desarrolle, no explotar sus recursos, es la Argentina de la pobreza extrema. Y yo digo que no hay contaminación más grande que la pobreza extrema, la falta de trabajo, la falta de posibilidades para los argentinos. Me parece que nosotros estamos frente a un desafío extraordinario. Y entiendo las preocupaciones porque nadie dice que en este desarrollo hay que depredar. Yo creo que el esfuerzo de la nueva conducción de YPF, de las autoridades provinciales, del parlamento, es dar indudablemente instrumentos de control ambiental, pero la negativa a priori realmente nos lleva irremediablemente como país al fracaso definitivo. Esta década que viene o tenemos el autoconsumo, la autosuficiencia petrolera y gasífera o estamos camino a la derrota definitiva como país. Y no vamos a tener instrumentos para potenciar la industria nacional, no vamos a tener elementos diferenciadores en la economía que puedan permitir que la Argentina crezca. Les recuerdo que el déficit energético –y no quiero aquí analizar los motivos, aunque seguramente ustedes nos trasladarán responsabilidades en orden a las políticas– indudablemente nos produce una erogación de divisas realmente importante que afecta el crecimiento del país.

Así que quería hacer esta reflexión, entendiendo su preocupación, contador. También estamos dispuestos a dar el debate que plantea el senador Sanz. Creo que el ámbito es el Congreso. Quiero recordar, porque hay algunos que hablan de ecología y medio ambiente, que yo voté personalmente en contra del proyecto de iniciativa. Yo soy un hombre que tiene un pensamiento pro-minero, pero entiendo que no se puede hacer minería en parques nacionales, no se puede hacer minería en lugares en donde hay agua y recursos, como son los glaciares. Y yo voté el proyecto de Bonasso, que me parecía que era el que más se ajustaba a la defensa del medio ambiente y al desarrollo también de nuestra propia minería. Así que estamos dispuestos a hacer ese desafío del debate que viene, pero también afrontar con coraje argentino y cívico el proyecto de desarrollo del petróleo, esa riqueza impresionante que

tenemos, que es la segunda cuenca después de China de petróleo y de gas, que es Vaca Muerta.

**Sr. Presidente** (Pereyra). –Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

**Sr. Fuentes.** –Con respecto a la inquietud planteada por el senador Sanz, quiero recordar que desde la reforma del 94 la cuestión ambiental es responsabilidad central y directa de las provincias. El Estado nacional da presupuesto mínimo y coordina. Y no solo distintos bloques han presentado proyectos de protección ambiental con respecto a lo que es la explotación no convencional, sino que hace escasos días el órgano ejecutivo de la provincia ha presentado un proyecto en donde hay un especial capítulo en el tratamiento del agua.

Con estas incompatibilidades que mencionaba el ingeniero en torno a actividades agropecuarias sustentables, que generaban saldos de exportación y el conflicto con la fractura que se provocó en la zona agropecuaria americana, donde las condiciones de ubicación de napas, de lo que es la magnitud del espesor de la roca madre a fragmentar son totalmente distintas, genera evidentemente la centralidad de ese conflicto. ¿Qué actividad se prioriza? Si la potencia del norte prioriza su autoabastecimiento y no dependencia respecto del conflicto, si sacrifica o no sacrifica. Esa es una cuestión. Es decir, no hay acumulación de capital sin sacrificar un recurso. Lo dice la historia: el carbón de Gales, la decisión estratégica de Churchill, de reemplazar el abastecimiento carbonífero de su flota por petróleo. ¿A qué voy con esto? Es una decisión en donde la pugna interna la va a resolver.

Ahora bien, yo quisiera que el ingeniero me dijera cuánta intensidad tiene la actividad agropecuaria en la depresión de Añelo, que probablemente sea una de las zonas de mi provincia más áridas del mundo, donde la roca madre tiene un grosor de dos mil metros de espesor y donde las escasas napas existentes están entre 400 y 600 metros. Es decir, hay una cuestión elemental en esto.

A medida que la brecha económica se amplía, los costos de operaciones en la extracción de petróleo requieren día a día mayores inversiones. Y en el conflicto que se ha armado con una propaganda muy hábilmente montada y con la fractura hidráulica nadie dice que YPF es pionera en desarrollo tecnológico desde la década de los 60 en los Yacimientos de Catriel Oeste. Lo que pasa es que los americanos manejan y desarrollan la diferencia de costo operativo de un pozo hecho por una empresa americana que domina esa tecnología y los costos operativos nuestros.

Entonces, en esta cuestión central del desarrollo coincido totalmente con el jefe de bloque cuando plantea lo de la Argentina verde, es decir, todo desarrollo conlleva riesgos. La discusión política es sobre cuáles son los límites de esos riesgos y fundamentalmente quiénes lo van a pagar. Por lo tanto, no hay que tener hipocresía en el tratamiento de la cuestión. Vuelvo a decir que aquellos mismos que propugnan el no desarrollo de la industria petrolera, al primer día que le falta un litro de nafta del tanque del auto patean los surtidores.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.

**Sr. Cimadevilla.** – En realidad, quería hacer una pregunta antes de que el senador Fuentes introdujera el tema del *fraking*, y estaba referido a lo que dijo el senador Pichetto. Estamos ante una sociedad condenada por falta de insumos, de explotación de recursos y que no hay contaminación más grande que la pobreza extrema. No creo que le podamos echar la culpa al medioambiente, honestamente. Sí creo que hoy que estamos tratando precisamente el tema energético, se debe a falta de políticas coherentes hasta en el propio partido de gobierno.

Y yo le pedía que incorporáramos un tema al debate, que es muy importante para el abastecimiento energético del país. Aquí estamos hablando de YPF y nos estamos limitando a una empresa que de un mercado energético ocupa el treinta y pico por ciento, mientras que en las provincias argentinas se siguen celebrando contratos con prórrogas hasta el agotamiento



de los yacimientos, con garantías de precios mínimos a las empresas petroleras y con la libre disponibilidad del crudo.

Mi pregunta es si estamos dispuestos también a incorporar este tema porque si no, va a ser imposible que en la Argentina -más allá de lo que reclamemos en este Senado- permitamos que los gobernadores se entreguen a grupos económicos -como se vienen entregando hace mucho tiempo-, y permitan este saqueo de nuestros recursos energéticos. Por eso, lo proponía como tema de debate también para incorporar, ya que genera este tipo de concesiones.

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Cimadevilla.** – La jurisdicción sigue siendo nacional. Una cosa es el dominio, y otra, la jurisdicción.

El artículo 1º de la estatización de YPF se da de patadas con las leyes que están aprobando las legislaturas provinciales sobre este tipo de contratos.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Rosas.

**Sr. Rozas.** - Quería coincidir con la preocupación del senador Sanz, ya que de ninguna manera me parece que es incompatible con lo expresado por el señor presidente del bloque del Frente para la Victoria. No es incompatible buscar el progreso cuidando el medioambiente. Todos tenemos conciencia que las industrias contaminan. Lo que sí se debe tratar es poner toda la ciencia posible para que ese impacto negativo sea el menor, pero no creo que sea un debate la posición del senador Sanz contradictoria a la del presidente del bloque justicialista. Necesitamos el autoabastecimiento, que se avance en una política energética rápidamente en el país y tratar de ver que el impacto sea el menor posible, pero sabiendo que algún impacto va a haber siempre que se avance en materia de industrialización. Por lo menos, esto es lo que tengo asumido como oposición.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

**Sr. Giustiniani.** – No quedó del todo respondida una pregunta que hizo el senador Pichetto, que es clave en este tema respecto a las características de la empresa sobre qué pensamos acerca de cómo debe ser la empresa. Si una empresa estatal, una sociedad anónima -como tenemos en este momento-, de qué manera se da la participación del capital privado y de qué manera podamos articular varios de los conceptos que acá se plantearon, que es desarrollo con medioambiente, inversiones con el interés nacional, y que esas inversiones extranjeras reproduzcan un desarrollo interno de nuestro país. Entonces, pasemos del blanco al negro sí sobre la práctica y los hechos concretos tenemos una valoración de eso, porque venimos en la República Argentina de historias dramáticas.

A mí me gustaría que alguna vez pidan perdón por la privatización de YPF, que pidan disculpas al país y no escuchemos cuentitos, como se ha hecho en este recinto, en donde parecería que convenía al interés nacional y de las provincias, que solo se trataba de poder tener un asiento en esa empresa que se había privatizado. Fue dramática esa privatización, porque ni Brasil, ni Venezuela, ni México, con el más crudo neoliberalismo privatizaron su empresa, y tampoco la dictadura de Pinochet privatizó el cobre, pero nosotros privatizamos YPF. Esa empresa que era Repsol número 29 o 30 en el mundo y no tenía pozos, pasó a ser la tercera o cuarta en el mundo. Esto es importante porque si no, no tenemos un balance histórico de lo que nos pasa.

Hoy estamos en una situación curiosa. Hablo desde el lugar de quienes votamos a favor de la estatización del 51 por ciento de las acciones de Repsol para que la Argentina retomara el control de la empresa, porque así como fuimos en soledad quienes nos opusimos a la privatización cuando todos los medios daban aliento y apoyaban eso -como hoy que todos los medios están de acuerdo con esto-, nosotros teníamos que acompañar. En ese

debate, planteamos que en el artículo donde se mantenía la característica de sociedad anónima no lo compartíamos. Porque estamos como en un limbo.

Por lo tanto, estamos discutiendo un proyecto de ley donde los argentinos vamos a pagar cinco mil millones de dólares y no sabemos cuánto en el tiempo vamos a endeudar a los argentinos por una empresa que es sociedad anónima y que rinde cuentas al mercado como tal, pero no a la Auditoría General de la Nación o a la Sindicatura. Podemos tener una valoración positiva de su actual CEO o no -la que se tenga- que responde a esta conducción nacional, a la Presidenta de la Nación. No sabemos hacia adelante una sociedad anónima cómo va a funcionar porque en el acuerdo con Chevron tenemos otra situación curiosa en donde no tenemos cláusulas confidenciales. Lo que sabemos es lo que conocemos a través de los medios de lo que se firmó con Chevron. Nunca vimos el acuerdo ni las cláusulas secretas ni confidenciales. No sabemos absolutamente nada.

Entonces, el tema de las características de las empresas en esta etapa, en el siglo XXI -no mirando cincuenta años atrás-, cómo debe ser la empresa del Estado, me parece que es un debate importante. Porque en el tema de este acuerdo, es decir, de los pasivos ambientales, no estamos discutiendo la Argentina verde versus la Argentina en desarrollo contaminante. No es esa la contradicción.

Cuando discutimos la ley de expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol se dijo que se iba a considerar el pasivo ambiental, y en este acuerdo no está considerado.

Yo conozco Añelo, pero mucho menos que el senador Pereyra y el senador Fuentes. Estuve en ese centro de salud. Días pasados, el senador Pereyra hizo referencia con gran elocuencia en el recinto. Hablé con mujeres de 25 años que han tenido varios abortos espontáneos, que pueden ser comprobables o no. En cambio, lo que sí es comprobable de la contaminación es que esa agua no se puede tomar en Añelo. Hablé con el intendente y la contaminación dejada en ese lugar ha sido por la explotación del convencional. Porque sabemos que las empresas si no las controla el Estado, depredan, y que puede el convencional explotarlo sin que contamine las napas. Por eso, hay que sellar muy bien los pozos. De esto pueden hablar muchísimo más el doctor Calleja o el senador Pereyra acerca del porqué pasa lo que pasa.

¿Por qué pasa lo que pasa? Que dejen contaminar a empresas como Repsol o como Chevron, y han dejado en Ecuador, significa mucho para las características del Estado que tenemos que construir. No estoy en absoluto de acuerdo con estas sociedades anónimas. Considero que esto no le agrega nada a la experiencia fallida de décadas pasadas, porque aumenta la falta de transparencia, y el Congreso de la Nación y el ciudadano de a pie no saben lo que pasa. Tenemos que confiar en algún mago que nos lleve a buen puerto y que el mercado sea el que aplauda o condene. Y nosotros sabemos de la experiencia del mercado que aplauda o condene. La conocemos dramáticamente también en la República Argentina.

En concreto, doctor Calleja, la idea era retomar la pregunta que había hecho el senador Pichetto en cuanto a las características de la empresa.

**Sr. Calleja.** – No conozco ninguna empresa que no tenga controles de auditoría interna y externa. Todas las grandes empresas son sociedades anónimas y tienen controles.

- *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Calleja.** – Después de que se privatiza YPF, el ministro Cavallo saca el decreto 1.108/93, donde modifica artículos que solamente puede hacerlo el Congreso, que son los que se refieren a la auditoría. Establece que se integran al sector público aquellas empresas donde el Estado tenga el 51 por ciento y capacidad decisoria.

Entonces, pone las dos cosas, y, en realidad, lo que dice la ley es que pide la mayoría accionaria, que ya la había perdido el Estado porque había vendido más del 51 por ciento,

pero tenía el poder de veto, es decir, tiene los cuatro o cinco artículos que establece la necesidad de que intervenga el Poder Ejecutivo o el Estado en lo que se conoce como "acción de oro". Al ponerle esa "y" cambia la ley que dice "o" y la saca del control de la auditoría. Ahora ya quedó adentro porque las acciones –por lo que he estado viendo– que se han recuperado tienen que ser transferidas con poder del Congreso. Es decir que está dentro de lo que es el sector público y estaría dentro de lo que es la Auditoría General.

**Sr. Presidente** (Fernández). – No, no...

**Sr. Calleja**. – El señor senador Giustiniani me preguntó por la empresa. La sociedad anónima y la sociedad del Estado tienen exactamente los mismos límites en cuanto a su accionar. Es lo mismo. Tienen la auditoría interna y la auditoría externa. Es exactamente lo mismo. Podía ser tan, más o menos eficiente. No entiendo por qué una sociedad anónima tiene que eximirse de controles, y menos de controles del Estado.

**Sr. Presidente** (Fernández). – ¿Puedo hacer una acotación?

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Adelante.

**Sr. Presidente** (Fernández). – Hay un error de interpretación fuertísimo, que ya lo hemos discutido en el recinto. Para demostrar lo que yo les voy a decir, se acaba de sacar una sentencia contra una demanda presentada por el señor senador Giustiniani, donde reclamaba el pronto despacho por el 1172 respecto del acuerdo con Chevron y le dicen que no, porque YPF es una sociedad anónima conforme la Sección V de la ley de sociedades.

En la Sección VI, a partir del artículo 308 se habla de las sociedades con capital del Estado mayoritario, el 51 por ciento. Es otro tipo de sociedades que no es esta. Aunque el Estado sea el dueño del 51 por ciento, es una sociedad con las características de la Sección V de la ley de sociedades anónimas; con lo cual, tiene los controles que dice la propia ley de sociedades, más los controles que le exige el hecho de ser cotizante en bolsa. Por lo tanto, tiene muchísimos más controles que cualquier sociedad común. Entonces, no es una sociedad normal. Estamos planteando una cosa que no se parece ni tiene nada que ver con eso. Es una sociedad anónima.

Quiero realizar dos acotaciones más. Respecto de lo que dice usted en cuanto a que es piloto, es claro que lo de Chevron es un plan piloto. Si estamos hablando de que Vaca Muerta tiene 30.000 kilómetros cuadrados y la concesión que tiene YPF es de 12.000 kilómetros cuadrados, el primer estudio son 20; 20 en 12.000 es un plan piloto. Son cien pozos más o menos.

La segunda parte de los 395 kilómetros cuadrados que se le otorgaría al acuerdo con Chevron son los que van a comprender 1500 pozos más. Entonces, es claro que se trata de un proyecto piloto. No hay que ser un genio para darse cuenta de que es piloto, ni Oscar Vicente ni nadie. Es un proyecto piloto porque se está hablando específicamente del estudio sobre lo no convencional.

El tercer punto es el siguiente: usted menciona el noroeste de los Estados Unidos. Texas tiene *shale* con una complicación más grande, que nosotros no la tenemos. Mire: a diferencia de lo que está pasando en Neuquén, en Oakland tienen un problema severo porque ellos están sacando *shale* a 500 ó 600 metros, cuando están pegados prácticamente a la napa de agua. Acá estamos hablando entre 2000 y 3000 metros de profundidad. Además, en Texas lo tienen prácticamente pegados a la ciudad. Aquí no sucede eso, Vaca Muerta no está ni cerca de la ciudad. Con lo cual, las condiciones están planteadas.

Lo que dice Pereyra, que de esto sabe cien veces más que yo, respecto de la situación de *fracking*, que no va a producir contaminación y que el agua es reciclada y reutilizada para la misma situación que la que se está planteando, muestra a las claras una definición de la estrategia de la empresa, que es la que nosotros tratamos de poner sobre la mesa cuando

discutimos estos temas.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – No es verdad que por ser una sociedad anónima tiene que quedar fuera del control estatal. En esta década se crearon en el Congreso dos sociedades anónimas con un accionista único, el Estado: Enarsa y Arsat. En las dos, en la creación de la ley, quedaron bajo la órbita de la ley 24.156. En el caso de YPF se podría haber hecho lo mismo en la ley de expropiación. No se hizo por una decisión política del gobierno nacional. Pero esa decisión política no obedece a que haya un mandato jurídico. Fue una decisión política. Con Arsat y con Enarsa quisieron que se auditaran y con YPF no; pero no es que por ser una sociedad anónima del derecho privado está fuera la discusión. Una decisión política...

**Sr. Presidente** (Fernández). – No, no está fuera.

**Sr. Sanz.** – Algunas les vienen bien y otras no les vienen bien. Pero aclaremos los tantos.

**Sr. Presidente** (Fernández). – No está fuera. Ha sido una decisión política que fuera una sociedad anónima.

**Sr. Sanz.** – No, no, pero le entendí recién como que esto era un mandato jurídico por la naturaleza jurídica. ¡No! ¡No, por la naturaleza jurídica no!

**Sr. Presidente** (Fernández). – No, senador. Usted me entendió muy bien.

**Sr. Sanz.** – No, no, no.

**Sr. Presidente** (Fernández). – La ley de sociedades...

**Sr. Sanz.** – Usted no lo dijo bien.

**Sr. Presidente** (Fernández). – La ley de sociedades tiene bien claras dos secciones bien definidas: la Sección V, que habla de las sociedades anónimas puras, cualquier sociedad anónima de nuestro país, y la Sección VI, que habla de la sociedad con capital mayoritario del Estado, definidas como tales. Arsat, por ejemplo, o Enarsa, no sé cuáles mencionó usted...

**Sr. Sanz.** – Arsat y Enarsa.

**Sr. Presidente** (Fernández). – ...son sociedades definidas como capital estatal mayoritario, con lo cual tienen todos los ajustes.

**Sr. Sanz.** – ¡No, no, no!

**Sr. Presidente** (Fernández). – En el caso específico...

**Sr. Sanz.** – ¡No, está equivocado!

**Sr. Presidente** (Fernández). – En el caso específico de YPF...

**Sr. Sanz.** – ¡No, está equivocado!

**Sr. Presidente** (Fernández). – En el caso específico de YPF se ha definido que lo que venía siendo una sociedad anónima siga siendo una sociedad anónima. No se cambió...

**Sr. Sanz.** – Estimado, senador, lo invito a leer la ley de constitución de Enarsa y de Arsat.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – ¡Por favor! ¡Por favor!

**Sr. Sanz.** – ¡Son sociedades anónimas del derecho privado! Lo que pasa es que ahí no había problema...

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Pide una interrupción el señor senador Pichetto.

**Sr. Sanz.** – ...y en el caso de YPF sí.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Una interrupción del senador Pichetto. ¡Por favor!

**Sr. Pichetto.** – Un segundito. El debate de los controles lo hemos dado reiteradamente. Es indudable que hay visiones que ustedes siempre han mantenido de manera coherente respecto del tema de cómo se controlan las empresas con capital estatal. Incluso, lo hemos discutido en el recinto. Pero me parece que la pregunta que hizo el senador Giustiniani, dejando de lado el aspecto del control, está planteada. Si usted considera que puede haber una empresa estatal o debe tener un perfil de sociedad anónima, yo no imagino una YPF estatal saliendo a buscar

en el mercado internacional inversiones privadas para desarrollar Vaca Muerta. Considero que de la manera en que está diseñada es posible el ingreso de capitales privados para poner en marcha esa zona tan vital e importante que tiene la Argentina.

Ahora bien, si fuera una empresa cerradamente estatal, en mi opinión, senador Giustiniani –creo que usted apuntó a eso, a qué perfil de empresa tendríamos– considero que no vendría nadie. Creo que no habría inversiones. Sería difícil que vinieran los capitales privados. Esa es mi visión. Por eso, me parece que también dijo el contador que Pemex estaba intentando abrirse. Vaca Muerta requiere 200.000 millones de dólares para desarrollar las 12.000 hectáreas que tiene YPF, partiendo de la base que Chevron ha invertido en 1.5 del área de Vaca Muerta 1.200 millones de dólares. Así que para generar esto hay que armar un esquema de sociedad anónima para que vengan; si no, no van a venir.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Morales.

**Sr. Morales.** – Señor presidente: deseo ampliar el planteo del senador Ernesto Sanz porque siempre tenemos este debate, especialmente con el señor senador Aníbal Fernández. No es un debate cualquiera y tiene que ver con cuál es la responsabilidad que tiene el Estado cuando tiene fondos aportados en alguna empresa y cuál es el marco jurídico de control que está establecido claramente en la Constitución, donde se determinan las competencias de la Auditoría General de la Nación.

Quiero leer el artículo 8° de la Ley de Administración Financiera, 24.156, que es de aplicación a toda la administración pública y también a entidades o sociedades en las que el Estado tiene participación. El artículo 8° expresa lo siguiente: “Las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el Sector Público Nacional, el que a tal efecto está integrado por: a) Administración Nacional [...] b) Empresas y Sociedades del Estado que abarca a las Empresas del Estado, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. [...]”. Esto tiene sentido porque son fondos públicos, dado que para la compra del 51 por ciento del paquete accionario vamos a pagar con títulos, con fondos públicos que ponen todos los argentinos.

Entonces, sin perjuicio de que esté en la normativa de la Ley de Sociedades Comerciales, también es competente la Auditoría General de la Nación, que es la que tiene que controlar y tutelar los fondos de la gente. Tiene un sentido y una lógica. No es como dice el senador Aníbal Fernández. El señor senador Sanz ha mencionado dos casos de creaciones de sociedades anónimas, donde no hay participación mayoritaria, sino que se estableció la figura jurídica de la sociedad anónima para que la tenga y esté sometida a la Ley de Sociedades Comerciales. Sin perjuicio de eso, también le compete a la Auditoría General de la Nación el control y la tutela de cuáles son los fondos públicos que están invertidos.

Entonces, es muy claro el inciso b) del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera, ya que plantea todo un criterio que no es caprichoso. Norma que, incluso, vino a modificar la vieja ley del Tribunal de Cuentas y que estableció un nuevo sistema proveniente de la reforma del 94, relativo a los mecanismos de control: entre ellos, de control interno y externo y la Sigen.

Ahora bien, de acuerdo con la ley, todos los fondos del Estado que son públicos se encuentran sometidos al control de la Auditoría General de la Nación. Y la plata que vamos a poner para pagar el 51 por ciento del paquete accionario proviene de esos fondos, es decir que pertenece a todos los argentinos y, por ese motivo, debe estar sometida a la Auditoría General de la Nación.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el senador Giustiniani.



– *El señor senador Fernández solicita una interrupción a la Presidencia.*

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Fernández.

**Sr. Presidente** (Fernández). – He intentado explicarlo cincuenta veces; por eso, la número cincuenta y uno no me cuesta más: por más que el Estado posea un porcentaje superior al 50 por ciento, fue una decisión política sostener la empresa como sociedad anónima en el marco de la Sección V de la Ley de Sociedades Comerciales; por consiguiente, no se trata de una sociedad del Estado con capital social mayoritario. Como dice el artículo 308 en adelante...

– *Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

**Sr. Presidente** (Fernández). – ¡Espéreme! ¡Yo lo escuché! Yo lo escuché; déjeme hablar a mí. ¡Siempre hace lo mismo! A usted le encanta tapar la boca de los otros; si yo no tapé la suya, ¡déjeme hablar a mí ahora!

Cuando arrancó la parte segunda que usted plantea y si tuviera razón, la Auditoría hubiese reclamado la participación y nunca lo hizo; asimismo, Sigen y nunca la reclamó.

Pero le voy a dar un dato: recién le acabo de decir algo al senador Giustiniani, quien no me dejará mentir, él presentó un pedido para el 1172 –que le compete únicamente a la Administración Pública– para conocer el acuerdo con Chevron. Pero, como no se expedían en tiempo y forma, también presentó un pronto despacho que fue rechazado judicialmente porque, justamente, le dijeron lo que yo le estoy manifestando aquí: se trata de una sociedad anónima; no es el Estado.

Se lo estoy explicando y no sé de qué otra forma decírselo; la discusión que estamos llevando adelante no tiene ningún sentido.

– *Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

**Sr. Presidente** (Fernández). – Bueno, ¿por qué no presenta a la Auditoría General de la Nación un planteo para que lo dejen entra en YPF y que la justicia le diga que sí?

– *Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

**Sr. Presidente** (Fernández). – Pero que el presidente lo presente judicialmente para que la justicia le diga que sí.

**Sr. Presidente** (Fernández). – ¿Sabe lo que le van a responder? Lo que le manifestaron al senador Giustiniani.

Senador, es una sociedad anónima y no se puede entrar, por más que no lo quiera entender y quiera hacer de esto un hecho de otras características.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

– *El señor senador Sanz realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Por favor, senador Sanz, respete el uso de la palabra.

**Sr. Giustiniani.** – Señor presidente: muchas gracias.

Lo primero que quiero hacer es felicitar al senador Aníbal Fernández por lo bien informado que está con la justicia, porque yo me notifiqué el lunes a las once horas de este fallo y no salió ni en la prensa ni en ningún otro lado. Así que, evidentemente, está muy bien informado de las resoluciones de la justicia. *(Risas.)*

– *El señor presidente Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

**Sr. Giustiniani.** – Es evidente que mantiene su...

– *El señor presidente Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

**Sr. Giustiniani.** – Senador Fernández: por eso lo felicito, porque mantiene aceitados los

mecanismos. *(Risas.)*

– *Varios señores senadores a la vez.*

**Sr. Giustiniani.** – Está bien...

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Giustiniani.** – Voy a hacer copias para todos.

– *El señor presidente Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

**Sr. Presidente** (Fernández). – Está publicado en el portal de la Corte.

**Sr. Giustiniani.** – Exacto.

Señor presidente y senador: justamente pedí la palabra porque lo que deseo manifestar tiene que ver con este tema del que estamos hablando. Resulta un verdadero disparate –y no lo digo exagerando– que no conozcamos el acuerdo con Chevron y que sea secreto. Esto viola el sentido común. Y la respuesta que nos da la empresa se basa en el hecho de que como es una sociedad anónima está con todo el derecho de tener cláusulas de confidencialidad.

Ahora bien, no hay cláusulas confidenciales; todo el acuerdo es secreto. Y de todo lo que hemos estado hablando es por los trascendidos de los diarios o por lo que ha dicho el señor Galuccio, pero nunca hemos tenido texto alguno en la mano. Entonces, como ciudadano común –no como senador de la Nación– presenté el amparo con el derecho de tener acceso a la información.

También por ese motivo pregunté sobre la cuestión del diseño que se ha hecho porque, cuando lo debatimos en el recinto –¡Y lo voy a volver a leer en el recinto!–, le leí el artículo que habla de la definición de sociedad anónima y es el mismo artículo que hizo Rodolfo Barra para las privatizaciones, y las dos copias de los dos artículos parecieran hechas por el mismo autor.

Entonces, la cuestión radica en mirar hacia delante, hacia el futuro del país. Nosotros votamos y acompañamos la estatización porque queremos una YPF que profundice lo que significa la política de autoabastecimiento mucho más que el autoabastecimiento, que implique un resorte –como siempre ha sido– en beneficio de la soberanía nacional y del desarrollo científico y tecnológico del país. No estamos hablando del pasado; hablemos de qué tipo de empresa queremos.

Ahora bien, en cuanto a una empresa donde todo es definido por un señor; donde el Congreso de la Nación y el ciudadano de a pie no pueden conocer un acuerdo que compromete al país por 35 años y donde se otorga una cesión directa de licitación, de explotación y de otros acuerdos que no conocemos, la verdad es que se está violando el sentido común. Por ese motivo, este debate es importante.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Senador: el señor senador Fuentes le pide una interrupción.

**Sr. Giustiniani.** – Sí, como no...

**Sr. Fuentes.** – A los efectos de no confundir, es importante no mezclar situaciones que son perfectamente diferentes.

En este sentido, deseo manifestar que hay tres convenios que son absolutamente independientes, porque una cosa es la relación entre YPF S. A. y Chevron S. A., en este caso, para explotar. Recuerden ustedes que la ley de soberanía hidrocarburífera se complementa con un decreto de promoción de inversiones a través del cual toda empresa que tenga un área concesionada, convencional o no, y traiga más 1000 millones inmovilizados durante cinco años, goza de un beneficio que consiste en la libre disposición de un porcentaje de lo extraído. Esto recién al cabo de los cinco años y, fundamentalmente, con precio internacional del mercado, pero con la prioridad y el privilegio del Estado –en el caso de que lo demande el

mercado interno— de poder comprar con esos mismos precios internacionales.

Ese es el convenio de YPF y Chevron. El titular de la concesión es YPF, quien, a la provincia del Neuquén, titular del yacimiento, garantiza el desembolso del dinero. Es lo mismo que si YPF celebrara un convenio operativo o de financiamiento con Chevron, titular de una concesión en el Golfo de México, ciertamente, se sometería a las reglas y jurisdicciones imperantes en esa zona, con los recaudos y secretos que la actividad requiere.

Lo público fue lo que se discutió en el seno de la Legislatura de mi provincia. Lo público es el contrato entre YPF y la prórroga de la concesión. La provincia del Neuquén, a cambio de determinadas cosas, otorgó su aprobación. Lo otro forma parte del desenvolvimiento del mecanismo de las empresas.

Entonces, reitero, una cosa es el convenio de la Nación con la provincia sobre el que, el otro día, el senador Pereyra pidió una aclaración relativa a su estado de avance. Hablamos de 1000 millones puestos en el triángulo Buta Ranquil, Añelo, Rincón de los Sauces a los efectos de atemperar el impacto de la demanda que semejante inversión por parte de las empresas va a generar en la zona. Ese es un convenio; el otro, es un convenio de funcionamiento en el Cluster experimental con los 1200 millones de dólares entre YPF y Chevron. Finalmente, se encuentra el convenio entre la provincia propietaria del yacimiento e YPF, titular de la concesión.

Entonces, de golpe vamos de uno a otro, de uno a otro. Sobre aquello que hace al patrimonio de los neuquinos y de la Nación, que es el recurso en el yacimiento, ha sido debatido en la Legislatura. Otra cosa es la ingeniería financiera o la ingeniería tecnológica que genera dos empresas en una operación. Eso quería aclarar.

**Sr. Giustiniani.** – Conocemos los convenios y la diferencia entre cada uno. Queremos conocer el contrato madre, nada más. Tienen el derecho los neuquinos que no lo conocen, los argentinos que no lo conocemos que somos de otras provincias, los legisladores y el ciudadano de pie a que no sea secreto un convenio que ata los recursos naturales del futuro de nuestro país. Nada más. Estamos pidiendo eso. No lo conocemos, es secreto.

Todos conocemos cuál es la diferencia entre el acuerdo con Neuquén, lo que eso significa de la Nación con Neuquén, de las obras posteriores. Estamos hablando en concreto de que es un disparate que sea secreto el convenio de YPF con Chevron, que ata a la Argentina a compromisos a futuro que define tribunales internacionales ante diferendos. De eso estamos hablando.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el senador Solanas.

**Sr. Solanas.** – Agregó algo cortito a lo que viene exponiendo el senador Giustiniani y también en relación con lo que decía el senador Fuentes.

El contrato de Chevron ni la Legislatura del Neuquén lo pudo discutir ni los legisladores neuquinos. Llegaron a un convenio, aprobaron el convenio de YPF con Chevron sin conocer ni leer el contrato firmado por Chevron.

**Sr. Fuentes.** – De ninguna manera la Legislatura del Neuquén tiene atribuciones para aprobar el convenio YPF Chevron, lo que la Legislatura hizo fue aprobar el convenio entre YPF y la provincia del Neuquén.

– *Murmillos en el salón.*

**Sr. Fuentes.** – No, no, no. Están mezclando ravioles con clavos. ¡Qué responsable!

– *Murmillos en el salón.*

**Sr. Fuentes.** – Pero, ¡no digan pavadas!

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra la senadora de la Rosa.

**Sra. de la Rosa.** – Gracias, señor presidente.

Quiero incorporar una pregunta que me parecía importante para que pueda ser

contestada por el doctor Calleja. Al principio, tuvo un concepto realmente importantísimo cuando dijo que los 5.000 millones de dólares a pagar a Repsol es poco e hizo una comparación justamente con los ingresos –que no me acuerdo si en los primeros cuatro o cinco años Repsol tuvo– y con una TIR de las más altas del mundo. Ese concepto me parece interesante.

Con lo cual, le quisiera preguntar al doctor Calleja si está contabilizando para la TIR cuatro o cinco años y quisiera saber de cuánto es esa TIR a la que se refiere.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Gracias, senadora de la Rosa.

**Sr. Calleja.** – Que quede claro. Es poco como cifra. Dentro del mundo petrolero 5.000 millones de dólares no es nada, pero esta operación me parece un regalo. Yo pienso –y esa es la crítica que hice– que se podía haber arreglado por mucho menos.

Repsol cuando viene compra las acciones al contado. Al frente de YPF estaba Roberto Monti, que había estado con Estenssoro cuando se hizo una operación con Maxus, cuyos pasivos ambientales están dando vueltas en el balance de YPF. Los fondos de pensión norteamericanos que manejan a YPF Sociedad Anónima lo traen a Roberto Monti; creo que con Roberto Monti en Maxus trabajó Galuccio.

En ese momento viene el acuerdo de Roque Fernández con los españoles –en aquel momento estaban los franquistas, no estaba Brufau, estaban los de los bancos madrileños– y empiezan a comprar YPF. Entonces, primero le venden el 15 por ciento y al final terminan en una asamblea, se pelean y los fondos de pensión norteamericano, a través de Roberto Monti, le piden efectivo. No aceptaron que Repsol comprara con acciones de otras empresas.

Y así fue. Después, vino, se le vendió todo –prácticamente hicieron una compra hostil– y compraron el 99,9. En el medio, se modificó la ley y quedó el poder de veto hasta que el Estado tuviera una acción, que ahí empezó a llamarse “acción de oro”. Entonces, vino y tuvo que comprar todas las acciones en efectivo, que parte se menciona cuando las vendieron las provincias. Vendió Oscar Vicente el 3 por ciento que tenía, vendieron los amigos de Estenssoro y se quedaron con el 99,9 por ciento. Allí empezaron ellos a hacer un cambio de política. No es que uno comparta lo de Estenssoro, que vendía, pero exploraba. Y en cinco años ellos recuperaron la inversión. Eso es lo que pasó.

**Sra. de la Rosa.** – La tasa interna de retorno, la TIR, me parece importante tenerla en cuenta en este tipo de operaciones. Esa era la pregunta directa. Nada más.

**Sr. Calleja.** – Por supuesto que hay que tenerla en cuenta.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Bueno.

**Sr. Calleja.** – El tema es en ese momento fue un gran negocio para Repsol, que siguió hasta el final y que se multiplicó porque no invertía, por ejemplo, en cuidar las refinerías, no invertía en exploración, violando la misma ley de YPF.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Bueno, contador. Le agradezco. El senador quiere hacer una pregunta.

**Sr. Mayans.** – Quería preguntarle si usted leyó el trabajo del Tribunal de Tasación. Sr.

**Calleja.** – Leí lo que expusieron acá; no vi los papeles de trabajo.

**Sr. Mayans.** – Y ¿usted objeta el trabajo que ha hecho el Tribunal de Tasación?

**Sr. Calleja.** – Hoy le expliqué al senador que yo soy un racional, para poder hacer una crítica y trabajarlo en serio. Yo tengo un trabajo acá, que me da distinto. Pero no lo puedo mostrar porque tengo que trabajar en serio. No puedo leer eso y decir: “Está mal”. A mí no me gustó. Me pareció que era una cosa bastante proclive a llegar a los 5.000 millones. No me gusta.

**Sr. Mayans.** – O sea que todo el trabajo que hizo el Tribunal de Tasación, usted, así, a ojo, dice que no corresponde.

**Sr. Calleja.** – No lo conozco. No conozco el detalle. No lo conocen los senadores, que tienen

más poder que yo.

**Sr. Mayans.** – Pero acá la ley es clara. Le encomienda al Tribunal de Tasación el trabajo. Entonces, para objetarla tiene que haber un trabajo técnico, específico, para poder decir que esto es así.

**Sr. Calleja.** – Sí. Deme tiempo y le hago el estudio, pero no tengo tiempo. Vengo acá...

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Bueno, gracias senadores. Gracias, contador.

**Sr. Calleja.** – Quería hacer una aclaración porque no terminé de contestarle al senador Giustiniani y al senador Aníbal Fernández.

Respecto de YPF y Enarsa, son sociedades anónimas, con leyes especiales. Son sociedades anónimas con leyes especiales. Esta es la realidad jurídica. Hay una ley especial en Enarsa y una ley especial en YPF, y son sociedades anónimas. Este es el tema, son sociedades muy especiales, no son sociedades anónimas puras del Código de Comercio.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Bueno, gracias. Muy amable.

Invitamos a exponer al doctor Mertehikian, apoderado de ASSUPA.

**Sr. Mertehikian.** – Buenos días a todos. Agradezco enormemente a este honorable cuerpo que nos dé la posibilidad de exponer en esta audiencia de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

Esencialmente, mi intención es hacer una brevísima explicación de cuál es la razón o el motivo por el cual estoy aquí presente, más allá de la generosa invitación que me han cursado; invitación que se ha cursado a raíz de una petición que nosotros hicimos en términos expresos ante la Comisión de Minería. De modo que estoy doblemente agradecido por la invitación y porque se haya hecho con tan poca anticipación, porque aceptamos que pudimos haber cometido algún error de tipo administrativo, razón por la cual les agradecemos.

No sé con cuánto tiempo cuento, pero voy a tratar de ser muy breve para que, en todo caso, si alguien tiene alguna inquietud, me pueda formular la pregunta que quieran.

ASSUPA es una organización no gubernamental con sede en la provincia del Neuquén, más precisamente en la Ciudad de Neuquén. En carácter de organización no gubernamental con propósito de protección de medioambiente ha formalizado cinco demandas contra la totalidad de las compañías petroleras que trabajan en la República Argentina y que operan en las cinco cuencas hidrocarburíferas que tiene la República Argentina y está procurando, en algún caso con éxito, ampliar esa demanda a la compañía Repsol, compañía española de capital limitado.

Al día de hoy esas cinco demandas están en pleno trámite. Una de ellas, la primitiva iniciada por la cuenca hidrocarburífera neuquina contra YPF y 17 compañías que operan en la región está radicada en la instancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hay otras cuatro demandas, todas ellas tramitando ante la Justicia Federal con asiento territorial o por la territorialidad de los tribunales con competencia en la materia. Caso de Mendoza, por la región Cuyo; caso de Caleta Olivia, en la Cuenca Austral, Golfo de San Jorge y en la justicia contenciosa administrativa de la Capital Federal.

En razón de esas demandas, lo que ASSUPA se propone es obtener, con carácter de proceso colectivo y en los términos que la Corte ha definido que funciona la ley general del ambiente y la cláusula constitucional del artículo 43, la recomposición del ambiente dañado por la actuación hidrocarburífera desde el tiempo en que estas compañías en cada área han funcionado y –en el caso particular que a esta sesión– le interesa todo lo que sea pertinente al Convenio de Solución Amistosa de Avenimiento Expropiatorio, con motivo de una cláusula de indemnidad específica que le da el proyecto de convenio sometido al Congreso de la Nación Argentina una cláusula en particular que a ASSUPA le llama poderosamente la atención o, cuando menos, entiende el deber de presentarse ante este honorable cuerpo y



explicar los motivos por los cuales no tiene acuerdo con esa cláusula más allá de que pueda ser un aullido a la luna y, en todo caso, explicar cuál es el estado de situación de las acciones que ASSUPA está llevando a cabo contra, ahora, como codemandada Repsol. En particular, tiene medida cautelar, lo que se llama, obviamente, una medida cautelar de anotación de *litis*, la existencia o conocimiento del juicio al Tribunal de Tasaciones de la Nación, a la Comisión Nacional de Valores, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a la Bolsa de Comercio de Madrid y a la Bolsa de Comercio de Nueva York porque la compañía Repsol es una empresa cotizante en las bolsas y mercados internacionales.

¿Qué es lo que pretende ASSUPA con estas cinco demandas? La recomposición del ambiente dañado y, en el caso de YPF y más precisamente en el caso de Repsol –esencialmente, por el poder de control que ha tenido esta última empresa hasta el momento efectivo de la declaración de utilidad pública del paquete mayoritario accionario que representa el capital social del 51 por ciento–, que se tome en particular consideración de la existencia de pasivos ambientales contingentes que deben ser resueltos al momento de la valuación de la tasación del monto expropiatorio que este Congreso determine. Simple y sencillamente dicho así.

La Cláusula de Indemnidad, siempre con el propósito de darle utilidad y especificidad a mi exposición con relación a la consulta del senador Urtubey que, específicamente, lo planteó en esos términos en la exposición anterior. Para ser muy concreto, la Cláusula VI del Convenio de Solución Amigable y Avenimiento Expropiatorio establece una indemnidad amplia, absoluta y completa con relación a la compañía Repsol con relación, en particular en el anexo 7 de esa Cláusula VI, entre otra causas judiciales a “ASSUPA con Total Austral y otros sobre Proceso de Conocimiento” que tramita en la Justicia Federal de la República Argentina y “ASSUPA sobre incidente en medida cautelar con Total Austral y otras” que también tramita ante la misma jurisdicción donde se ha ordenado a la compañía Repsol que especifique, independientemente de la compañía YPF y de las otras codemandadas: ¿qué medidas adoptó con el propósito de prever fondos con el propósito de recomponer en términos colectivos el medioambiente perjudicado por su acción como sociedad controlante de –en un momento, por el año 2007–, más del 90 por ciento del capital accionario?

Suelo decir que los abogados debemos rendirnos a las evidencias y ante las evidencias corresponde rendirse, de lo contrario sigue siendo una discusión estéril. Las evidencias con las que nosotros nos hemos conducido hasta el presente desde los principios de los años 2000 en la promoción de estas acciones judiciales son aquellas evidencias documentales que para nosotros pueden resultar absolutamente indubitadas. De esas evidencias, las que hoy tenemos y podemos admitir con carácter de absolutamente indubitadas son: un informe ejecutivo del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, solicitado a una consultora que contrató el gobierno de la provincia del Neuquén allí por el año 1995, con el que nos encontramos fortuitamente porque está incorporado al expediente que tramita en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que valuó en cerca de 500 millones de pesos convertibles en dólares –1 a 1– solamente la remediación ambiental y las tareas de recomposición del ambiente en la zona de Rincón de los Sauces; la otra cifra que tenemos como evidencia es la que surge del informe Mosconi y alguna publicación, sólo y exclusivamente atribuida a la defensa letrada de las compañías petroleras –nuestros contendientes en estas causas–, que extrapola los números de Rincón de los Sauces a los que había llegado el PNUD trayendo una cifra, de la que ASSUPA no puede dar fe alguna porque no tiene, a la fecha, los medios periciales al alcance para llevarla a cabo, que valúa en alrededor de 5000 millones de dólares el pasivo medioambiental que las compañías petroleras podrían enfrentar si extrapolaran los mismos criterios que utilizó PNUD sólo para la región de Rincón de los Sauces.

Ofendería la inteligencia de los senadores de la provincia del Neuquén inmiscuirme más allá, sobre todo y en particular, siendo el senador Pereyra un hombre de la industria.

Pero lo que también queremos decir enfáticamente es que ASUPA no se opone al desarrollo petrolero argentino, sino que está absolutamente convencida porque la evidencia internacional de otros países que, al menos en este rubro, se dicen desarrollados han demostrado que la explotación hidrocarburífera puede hacerse con la mayor armonía con el entorno con el que se desenvuelve.

Tuve esa experiencia por sus propios medios, cualquiera que haya tenido la posibilidad de recorrer el Estado de California en los Estados Unidos de Norteamérica puede ver y comprobar que la explotación hidrocarburífera convive con la explotación agropecuaria y ganadera. Lo he visto yo, no me lo contó nadie. He visto vacas pastando cerca de cigüeñas extractivas de petróleo. Razón por la cual, si seguimos conduciéndonos por la evidencia, está indicando que en los países desarrollados esta actitud armoniosa tiene posibilidades concretas de llevarse a cabo. ASUPA nunca volcó ninguna cifra en ninguno de los procesos en los que interviene por la sencilla razón de que sostiene dos cosas: la primera, la dinámica de la situación y, en segundo lugar, el avance de las tecnologías aplicadas. De lo que sí está convencida ciento por ciento es que la industria extractiva puede convivir con la industria de la remediación ambiental generando tantos o más puestos de trabajo en forma armoniosa.

Nosotros nos hemos tomado el trabajo, porque nos incumbe la carga de la prueba de lo que estamos diciendo, de hacer algunos relevamientos con los medios a nuestra alcance y hemos logrado detectar solo de las propias denuncias de las compañías petroleras, más de 2.700 denuncias de episodios por ellas mismas denunciadas solo en la cuenca hidrocarburífera neuquina.

Como aquello de que a confesión de parte, relevo de prueba es en este capítulo mandatorio, básicamente lo que nosotros estamos queriendo significar en todos los ámbitos en los cuales tenemos la posibilidad de decirlo, más allá del ámbito forense judicial por supuesto, me refiero a los ámbitos institucionales, estamos tratando de explicar que este tema debe tener una prioridad de las más absolutas. Y como en esta oportunidad el Congreso de la Nación Argentina está tratando el compromiso o el proyecto de ley que aprueba el convenio de solución amistosa, nosotros entendimos oportuno y como una oportunidad invaluable el hecho de que ustedes hayan tenido la gentileza y generosidad de escucharnos para decir esto que mínimamente queremos decir. Más allá de esta explicación inmediata –por supuesto estoy en absoluta disposición para contestar–, no quiero concluir sin antes decirles que no hemos inventado absolutamente nada, únicamente acudimos a las bibliotecas.

Nuestra jurisprudencia tiene establecido desde el año 1973, en una de las más laudables integraciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –con solo pensar que había juristas de la talla de Héctor Masnatta del doctor Arauz Castex–, el criterio del llamado corrimiento del velo societario en una sentencia señera que se llamó Swift–Deltec. Un criterio que luego se transmitió a la legislación vigente en la República Argentina, que es la Ley de Sociedades y la Ley de Concursos y Quiebras, y que responde al concepto del controlante de una sociedad comercial. El controlante de esa sociedad comercial durante un montón de años fue la compañía Repsol. Desafortunadamente la compañía YPF no continuó con un proceso con el que ASSUPA había arribado a una intención de acordar mediante documentos escritos presentados ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación allá por diciembre de 2011. De hecho, la Corte había llamado a una audiencia pública a las partes y tuvimos una audiencia pública con todas las representaciones letradas de las compañías petroleras. La evidencia que quedó claramente establecida allí fue doble: por un lado, que la compañía YPF –en su entonces conducción– tuvo a bien celebrar un preacuerdo con la

compañía ASSUPA, y así lo expuso ante el superior tribunal de este país, con el propósito de estudiar en conjunto un cúmulo de situaciones perjudiciales para el medio ambiente y un camino para resolverlas, sometiéndole al Tribunal un procedimiento de solución muy pero muy parecido al que la propia Corte empleó en la causa Mendoza, Beatriz, que es sobre la cuenca Matanza–Riachuelo. Con otras particularidades y otras complejidades, pero absolutamente homologables, las otras diecisiete compañías petroleras que tenían representación en esa audiencia pública únicamente nos trataron como si fuéramos el demonio personificado.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Su tiempo ha finalizado, doctor.

**Sr. Merteikian.** – Es un segundo, solamente.

Simplemente recalcar esta situación y señalar que esencialmente lo que pretendemos es que este tema se ponga en la agenda y que la compañía YPF y Repsol tomen el camino de la senda, que por alguna razón que desconocemos, en diciembre de 2011 abandonaron a pesar de los compromisos que habían asumido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Gracias, doctor.

Quiero hacer una acotación. Con respecto a la remediación o la contaminación del suelo que hemos tenido, desde el sector del trabajo hemos exigido permanentemente la remediación y durante la época de Repsol no pudimos lograrlo. No había inversiones, no había nada. Pero sí en esta YPF se está haciendo un trabajo muy fuerte en la remediación de suelo, han contratado muchísimas empresas que se dedican a este trabajo: la remediación.

Por otra parte, también quería comentarle con mucho respeto al doctor que estuvo exponiendo que no hace falta ir a California para ver cómo se desarrolla la actividad petrolera, para eso podemos observar en la Chacra, entre la producción de manzana, de peras, que hay pozos petroleros, hay baterías. Esto se da en Fernández Oro, en General Roca, en Cinco Saltos, en la provincia de Neuquén, donde está el yacimiento El Centenario, en medio de toda la producción frutícola y hortícola.

Creo que se ha puesto muchísima atención en el desarrollo de la actividad petrolera, y que realmente se está cuidando. En este momento se está cuidando el medio ambiente, y doy fe. Por eso dije que me gustaría que visitáramos los lugares de producción y de explotación para que observen todas las medidas que se toman para el cuidado del medio ambiente. Los trabajadores queremos desarrollar el trabajo, las tareas, dentro de un clima que asegure la salud, no solo de ello sino de las poblaciones donde se vive. Somos cuidadosos en lo que hace la contaminación del Río Colorado, aguas abajo, que en otras épocas hemos visto la contaminación del agua, no solamente para la zona del Rincón de los Sauces sino podemos observar para abajo Río Colorado, Catriel, 25 de mayo, que esas aguas contaminadas que iban manchadas de petróleo, cosa que ahora no está ocurriendo.

En eso quería hacer una acotación y darle la palabra al señor senador Sanz, que la había pedido.

**Sr. Merteikian.** – Con todo el respeto del mundo, sin ánimo de manejar una audiencia que no me corresponde, simplemente decirle dos cosas. La primera es que somos absolutamente conscientes de que los trabajadores de la industria están comprometidos con este objetivo noble. Ellos son los primeros perjudicados si las cosas no se hacen bien y nosotros somos ciento por ciento conscientes de eso.

Lo segundo, seguramente no fui suficientemente claro cuando traje el ejemplo de California. No niego la coexistencia armoniosa en la República Argentina de ambas actividades. Traje el ejemplo de California al solo efecto de explicar, si usted me permite, con cierta cuota de chovinismo nacionalista que me resulta sumamente desagradable que hagan aquí lo que no hacen en sus países de origen. Era eso simplemente lo que quería decir.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – Creo que la presencia del doctor Mertehikian nos permite abordar el tema de los pasivos ambientales no desde la óptica de la discusión de hace un rato, que es una discusión extraordinaria que nos debemos respecto a la vinculación con el medio ambiente, los presupuestos ambientales y la legislación, sino al tema concreto de cómo influyen los pasivos en la valuación de una empresa. Creo que para esto tiene que servirnos la presencia del doctor. Por lo menos, nosotros queremos aprovecharlo y explotar esta presencia de él para sacar alguna conclusión vinculada a si es posible lo que se denominan pasivos ambientales y que tienen –como bien lo ha dicho el doctor Mertehikian– o tuvieron a Repsol como principal exponente en los años en que manejó la compañía. Es decir, si pueden ser valuados y si esa valuación nosotros la podemos llevar al seno de la valuación final de la compañía, que es lo que a nosotros nos está convocando: el monto de la expropiación.

Yo me quedo con dos cifras que el doctor Mertehikian dijo: una la del PNUD, que es solamente para el área del Rincón de los Sauces, cuando todavía faltaban muchos años de explotación. En esto quiero que esto me corrija si es que esto influye en el monto. Allá por el año 1997 lo escuché. Hablaba de 500 millones de dólares solo para el área de Rincón de los Sauces, que cualquiera que conozca el tema y la geografía, es una partecita de la cuenca neuquina y con alguna lengua en la cuenca cuyana de mi provincia.

La otra cifra que escuché es la que años más tarde a toda el área de la cuenca aparecería una cifra entre todas las compañías petroleras parecida a los 5 mil millones de dólares en concepto de obligación de remediación.

Más allá de que son estudios que nosotros no nos vamos a valer técnicamente en esta ocasión, son referencias. Precisamente lo que a uno le hubiera gustado preguntar a los miembros del Tribunal de Tasación es si en la valuación de los pasivos contingentes ellos tuvieron este tipo de referencias. La pregunta que le quiero hacer concretamente es si después de que Repsol abandonó el acuerdo homologado en la Corte y que está registrado en la Corte hubo a partir de ahí algún avance en la causa de tal manera que uno podría suponer que en cualquier momento puede haber una sentencia y que esa sentencia pueda determinar en cabeza de YPF –hoy la YPF sin Repsol– una obligación dineraria de remediar.

**Sr. Mertehikian.** – Una expresión que necesito ratificar. ASSUPA nunca transmitió valores que no fueran valores surgidos de informes de terceros. Es decir, traje el ejemplo de PNUD como una cifra que surge de una consultoría privada hecha con financiamiento del Banco Mundial, encomendada por el gobierno de Neuquén, que está incorporada al expediente judicial. Y el otro dato de los 5 mil millones de dólares, del que no me puedo hacer cargo, es una extrapolación, que en una publicación específica de la industria hidrocarburífera, los abogados externos de una de las compañías que asesoran a la cuestión, creemos que con el propósito de generar un estado de incertidumbre en la industria y personificarnos como el demonio, tiró esa cifra, de la que no me puedo hacer cargo porque no sé ni siquiera cómo diablos llegó a ese número.

Con relación a la pregunta específica, hoy los procesos judiciales están en plena sustanciación. Le diría que el que más lentamente está funcionando o el último episodio importante es el de la Corte en diciembre de 2011, al que hace pocos días le hicimos una nueva petición, a propósito de esta circunstancia, en la que le estamos pidiendo o renovando una solicitud de medidas judiciales cautelares contra Repsol, porque la Corte tiene pendiente en ese expediente la decisión sobre si es codemandada autónoma.

En respuesta concreta, los procesos están avanzando. Esperamos que terminen en sentencias y que éstas contengan acciones concretas para resolver las cuestiones medioambientales que dañosas o que con daños relevantes estén identificadas y la cifra que

resulte de allí será la que la tecnología aplicable a ese momento demande.

Ni ASSUPA ni yo estamos en condiciones de decirle hoy que son cinco, cuatro o doce mil. Por eso, nosotros obramos solicitándole la medida cautelar de anotación de litis en estos organismos, entre los cuales el Tribunal de Tasaciones es uno de ellos, y la medida está registrada.

¿Qué tiene por propósito? Señores, ustedes que van a hacer la evaluación de la compañía a los efectos de la declaración de utilidad pública y la expropiación -y lo hicimos mucho antes de ingresar en este Congreso el acuerdo de solución amistosa-, tomen en cuenta que hay pasivos y deben ser evaluados.

Para no entrar en tecnicismo absurdamente, la anotación de litis es el estadio anterior al embargo. Como no tengo suma líquida y exigible para trabar una medida cautelar de embargo, lo que hago es anotarle a la comunidad que pueda tener interés a través de registros públicos la existencia del proceso judicial. Por eso, estamos procurando hacerlo. Estamos con el trámite diplomático para hacer en la Bolsa de Comercio de Madrid y en la Bolsa de Valores de Nueva York que los terceros que con algún interés -esto es de mi absoluta cosecha, es decir, el Estado nacional que va a pagar una expropiación- tengan la noticia de que este proceso existe, que hay una contingencia que no está valorizada, porque si lo estuviera, la medida cautelar sería un embargo, pero como no tengo forma todavía de definir ese valor, lo que nosotros decimos es que los procesos judiciales van a avanzar, los medios periciales van a tener que validar si las propuestas de remediación ambiental que las compañías presenten en esos procesos judiciales son adecuados para resolver los pasivos que estén determinados y el valor será el que surja de la inversión que el que ha cometido el daño tenga que afrontar. Es tan simple y complicado como eso.

**Sr. Pichetto.** – En la misma línea del senador Sanz, ¿cuál es el estado actual de la causa ASSUPA? ¿En qué etapa estamos? ¿Ya hubo contestación de demanda, hemos entrado en alguna prueba de carácter pericial, o estamos recién en la parte preliminar y ha habido audiencia de conciliación? ¿Cuál sería el estado?

Otra pregunta que le quiero hacer es que -además de Repsol- el codemandado por principio de responsabilidad plena es el Estado nacional. La competencia es materia originaria de la Corte.

**Sr. Mertehikian.** – Los cinco procesos judiciales están en estadios distintos. En el expediente que tramita en la instancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, están citadas como terceras al proceso las provincias con incumbencia hidrocarburífera, léase la provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y Mendoza. Porque hay esa lengua en la cuenca neuquina que toca el reclamo de regalías que tenía el senador Sanz.

En el expediente que tramita en la Corte, la provincia de Río Negro adhirió a nuestra demanda y se convirtió en coactor nuestro, porque entendimos que las provincias son titulares originarias del dominio. Y aquí con alguna pequeña discrepancia relativo a la jurisdicción. No me acuerdo quién fue el interlocutor, pero tengo una discrepancia severa, aunque no es el caso de la charla. Ese expediente tiene traslados o excepciones. Las excepciones se resolvieron, hubo una audiencia pública en la Corte y el proceso está pendiente. Hubo una suspensión de términos, que concluyeron, y el proceso está en la Corte. Como todo superior tribunal de justicia de todas las provincias de la República Argentina o de la propia Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, no tiene plazos para fallar.

- *El señor senador Pichetto realiza manifestaciones sin el uso del micrófono.*

**Sr. Mertehikian.** – No. Todavía falta producir los medios de prueba que estamos



proponiendo. En ese caso, con el propósito de evitar el dispendio de actividad jurisdiccional, generar costos innecesarios a las partes fue cuando con YPF celebramos ese preacuerdo con el propósito de establecer un procedimiento que definía la línea de base ambiental, el pasivo medioambiental y cuáles eran las actividades que debían desarrollarse para resolver aquellas situaciones que se determinarían con la intervención de algún cuerpo pericial multidisciplinario en alguna organización que fuera ágil, eficiente y de valor prestigioso, sea pública o privada, pero someterla al tratamiento del tribunal, y que decidiese. En los otros expedientes, tienen distintos estadios. En el expediente que tramita en la justicia federal de Caleta Olivia por la cuenca del golfo San Jorge, tiene un proceso de avance. Está para dar traslado de la demanda. Hay medidas preliminares para determinar la nómina de directivos y la situación de seguro ambiental del artículo 22 de la Ley General de Ambiente. Por lo tanto, hay avances dirigidos a delimitar el objeto de la litis y quiénes son la totalidad de los sujetos que actúan en la cuenca.

En el caso de la justicia contencioso administrativa federal, hay una medida cautelar. Ya se amplió la demanda contra Repsol y estamos en las diligencias previas al traslado de la demanda. Lo que pasa es que ahora tenemos un codemandado de relevancia, que es Repsol. Entonces, a efectos de evitar que nos plantee nulidades por la cuestión del no ejercicio debido del derecho de defensa, hay que integrarlo previamente para darle la misma oportunidad que tienen los demás.

En el caso de la justicia federal de Salta, el expediente tramita por la cuenca nordeste. Allí también está muy avanzado. Y en el caso de la cuenca cuyana, tramita la justicia federal de Mendoza, y ahí hay una cuestión de competencia porque dice que debería ser la Corte la que intervenga, ya que hay una provincia codemandada. No sé si eso responde su pregunta.

- *El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

**Sr. Mertehikian.** – En dos expedientes que iniciamos en la instancia originaria de la Corte, nos remitieron a la justicia federal. En uno lo conservó y en otro lo remitió a la jurisdicción cuyana. El juez federal de cuyo dijo que no, que es de la Corte. Entonces, estamos en el “va y viene”. Lo cierto es que mal haría yo en decirle cuál es el mejor lugar para litigar en la República Argentina, sobre todo cuando un tribunal que tiene siete miembros necesita cuatro para ponerse de acuerdo.

La proactividad que ha demostrado la Corte en el caso “Mendoza, Beatriz” pretendemos que se traslade aquí. Con esa acción de la audiencia pública, para nosotros fue un avance importante. Lo que nosotros intentamos sin éxito –debo decirlo aquí para que quede claramente expuesto y no haya ninguna sospecha ni siquiera de emitir información, y no renunciaré nunca a eso- es retomar el camino que quedó trunco en diciembre de 2011 con la compañía YPF con el propósito de honrar lo que la Corte hizo, que es aplicar una mediación inteligente. Esto no es una adulación al Tribunal, sino una mediación proactiva. Tiene por propósito -y nosotros entendimos que esa era la vía- emular o tomar, adaptando lo que la propia Corte hizo en el caso Mendoza, que no solamente se refiere a qué pasó para atrás, sino a qué debe hacerse para adelante para que no vuelva a suceder lo que haya pasado.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.

**Sr. Sanz.** – La última pregunta es abusándome de la condición de experto en derecho administrativo.

**Sr. Mertehikian.** – Alguien en un tribunal oral, que está presente, me puso en el cielo de los administrativistas. Es absolutamente falso eso. Lo hizo él porque estaba en una situación difícil y me quiso echar la culpa a mí, pero no es cierto.

**Sr. Sanz.** – Alguna vez lo sufrimos nosotros como opositores cuando el oficialismo lo trajo

por la ley de medios.

**Sr. Mertehikian.** – Esas cosas de la vida en la que la Corte me terminó dando la razón.

**Sr. Sanz.** – Déjeme ver si empató porque todavía me duele.

**Sr. Mertehikian.** – No fue mi intención.

**Sr. Sanz.** – Lo hizo muy bien sin duda.

Por eso, me quiero abusar de esa sabiduría que usted expuso alguna vez en contra nuestra y le quiero hacer una pregunta.

**Sr. Mertehikian.** – Espero que no me guarde rencor. No fue mi intención herir la susceptibilidad de nadie ni mucho menos de otros órganos.

**Sr. Sanz.** – Usted tiene cosas escritas que he leído sobre la Ley de Expropiación. Por eso, quiero abusar de usted dos minutos en este tema.

Según lo que entiendo de la Ley de Expropiación, una vez declarada la utilidad pública por ley y hechos todos los trámites, el final de la película es o depósito judicial que determina el Tribunal de Tasación o avenimiento. Entonces, la pregunta es si hay una tercera categoría que apareció en este debate ayer que se denomine “solución amigable”, ¿o esto es el avenimiento?

**Sr. Mertehikian.** – La ley 21.499 es la que rige el trámite del procedimiento administrativo o proceso judicial expropiatorio. Es una vieja ley que reglamenta el artículo 17 de la Constitución Nacional, que es el que establece que para producir lo que se denomina “un despojo constitucional de la propiedad privada” es imprescindible: la ley de declaración de utilidad pública, la previa indemnización y la desposesión en esa secuencia.

La ley 21.499 adopta un criterio que utilizan todas las leyes que regulan el trámite expropiatorio a nivel provincial. Usted sabe positivamente que esa cláusula constitucional del artículo 17 y el instituto de la expropiación es típico del derecho público eminentemente local. Si bien hay derecho público de carácter federal e internacional, la expropiación es un instituto del derecho público local. Por lo tanto, todas las jurisdicciones tienen la competencia constitucional para reglamentar el instituto expropiatorio.

La ley 21.499 prevé dos supuestos. En ambos es imprescindible la tasación oficial del Tribunal de Tasaciones, y si no existe esta posibilidad, por organismos específicos –creo que lo dice el artículo 10. Y frente a la tasación, tiene dos opciones. La posibilidad del típico contrato de derecho público, que es el avenimiento expropiatorio, o en caso de no haber avenimiento, que es una solución amigable con el sujeto expropiado, incluso, la ley prevé que si hay inmuebles involucrados el valor de tasación oficial puede aumentarse en todo concepto en un diez por ciento porque la ley está pensando que al evitarse el juicio expropiatorio, que es la otra alternativa, es un motivo para incentivar el acuerdo conciliatorio, que se llama “avenimiento expropiatorio” y es típicamente un contrato de derecho público. Aquí se lo ha llamado “solución amistosa y avenimiento expropiatorio”.

El otro camino en caso de no haber acuerdo en esos términos es previo depósito o después de la tasación, concomitante depósito de la suma fijada oficialmente promoción de la acción expropiatoria y desposesión en esa secuencia.

**Sr. Sanz.** – En cualquiera de esos casos, el dictamen que usted ha dicho del Tribunal de Tasaciones es imprescindible.

**Sr. Mertehikian.** – La ley establece que en el caso de inmuebles la intervención del Tribunal de Tasación es obligatoria. Tratándose de bienes muebles puede haber otros, no recuerdo... Dice: la intervención de otros organismos o de otros expertos, pero hay que ver cuál es el criterio que se utiliza para valorar una compañía como... cuál es el objeto de la expropiación.

No me quiero meter en aquello que no ha sido objeto de mi invitación, pero por lo que he leído no he tenido ninguna posibilidad de acceder al dictamen del tribunal. O sea, estoy

simplemente tocando, no digo de oído, pero sí estoy hablando en términos conceptuales de lo que la ley dice.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Una acotación del senador.

**Sr. Presidente** (Fernández). – La pregunta del señor senador Sanz, no quiero hablar por él, no soy su exegeta, tiene que ver con una discusión que se presentó en el día de ayer. Si bien la ley que expropia el 51 por ciento del paquete accionario de YPF, que permite la condición de *management* en cabeza de los funcionarios puestos por el Estado, dice específicamente que se va a expropiar en función del artículo 17 de la Constitución y, por tal motivo, como no dice la Constitución que existe un Tribunal de Tasación específico, la Constitución dice que deberá declararse de utilidad pública y sujeta a expropiación y pagarse, yo insisto en que el dictamen –que es un dictamen, no es una sentencia, es un consejo, es una propuesta que hace la valoración del Tribunal de Tasación– es un privilegio que tiene el Estado, ya que si quiere hacerse del bien mueble –como dice usted– en forma obligatoria o de la cosa, lo que hace es depositar en forma... consignar judicialmente lo que dice el propio Tribunal de Tasación y hacerse del bien.

En casos como este, algún senador ayer expresó que se estaba violando la ley, mal se puede violar la ley porque lo que el Poder Ejecutivo está haciendo es enviar un acuerdo de partes, que –entiendo– es lo que le da la condición después de una discusión política a un buen negocio, que el Poder Ejecutivo entiende que es lo mejor para el país y que lo que hace es modificar la ley posterior a la ley anterior. Ergo, lo que está diciendo a partir de la aprobación del acuerdo es que no está expropiando en términos de la ley de expropiaciones, sino que está redefiniendo un valor específico que se pusieron de acuerdo entre las partes.

Esto es lo que planteé en el día de ayer. En mi visión, es un acuerdo entre las partes que viene al Congreso para definir el valor específico que va a tener y que excede al dictamen de un tribunal administrativo.

**Sr. Sanz.** – ¿Me permite?

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Perdón, perdón, vamos a ordenar el debate, senador.

**Sr. Sanz.** – Sí, bueno, pero...

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Urtubey. Hay una interrupción pedida por el señor senador Pichetto. ¿Usted la autoriza?

- *Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

**Sr. Presidente** (Fernández). - Véalo a Marienhoff, que dice con claridad que primero es la solución amistosa antes de ir a los estrados. Esta es la definición que está siguiendo el gobierno. Véalo en Marienhoff.

- *Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

**Sr. Presidente** (Fernández). - Sí, pero hay una forma de determinar el valor porque lo que dice el tribunal, que es un tribunal administrativo y no dicta sentencia, sino que dicta un valor determinado, cuando viene a este Congreso lo hace para darle razón de ser a ese acuerdo. Está excediendo la propia legislación anterior que fue la que determinó que se lo expropiara.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Urtubey.

**Sr. Urtubey.** – Doctor: la verdad es que quiero agradecerle la presencia también y la seriedad con la que encaró su exposición.

**Sr. Mertehikian.** – Muchas gracias, señor.

**Sr. Urtubey.** – Aclarando de que no hay un monto por una cuestión de esa misma seriedad que se ve que mantiene no sólo acá, sino cuando litiga.

**Sr. Mertehikian.** – Muchas gracias. No todo el mundo opina lo mismo.

**Sr. Urtubey.** – No ha puesto monto y en todo caso si puede hablar de un monto ha sido

referenciado a una situación concreta en base a un informe del PNUD .

He estado mirando un poco el informe –y corrijáme si no es cierto–, las situaciones de producción del daño ambiental, o sea, los momentos de producción, abarcan muchísimas situaciones de la vida de YPF. Observo que muchas, si voy a situar desde cuando está... muchas son de la YPF puramente estatal, de la YPF privada, digamos, y no se cuánto de eso, porque no está muy precisado en el informe, abarca la YPF. El primer punto sería ese, digamos, la causa del daño; una gran parte de esa causa del daño está situada con anterioridad al ingreso de Repsol como accionista de la compañía. Esto sería un poco lo que yo deduzco de este primer informe.

En función de eso, veo que usted, con corrección, demandó a YPF, porque la Ley General del Ambiente pone como legitimación pasiva de estos asuntos básicamente más al operador que al concesionario, pero también al concesionario y al operador. La pregunta es: la ampliación a Repsol, que usted bien precisa que ha sido con posterioridad al inicio de la demanda, que no pensó en hacerlo cuando...

**Sr. Mertehikian.** – No era necesario originalmente.

**Sr. Urtubey.** – Por eso, digo...

**Sr. Mertehikian.** – Ahora le explico por qué no era necesario originalmente.

**Sr. Urtubey.** – Entiendo. Esa situación de legitimación pasiva de Repsol como accionista, porque hasta ahora reconozcamos que los accionistas... porque, si no, podría también Esquenazi ser responsable, es decir, cualquier titular de una acción que cotiza en bolsa podría ser demandado por algún daño ambiental de la compañía. Por eso, me parece que está bien demandada la compañía. Ahora bien, esta legitimación pasiva de Repsol como accionista, usted la fundamenta en el planteo Swift-Deltec de ese fallo de la Corte, pero lo cierto es que la Ley General del Ambiente... digamos, usted necesita que jurisprudencialmente algún tribunal lo acepté como codemandado, cosa que aún no ha sucedido.

**Sr. Mertehikian.** – Sí, ya ha sucedido.

**Sr. Urtubey.** – Perfecto. Eso es lo que quería que me precisara, es decir, si ha sucedido en el fondo de la cuestión o a los efectos de una medida cautelar. Quiero saber del tema de la legitimación y si Repsol ha sido... Todo lo demás ya es valorativo y yo no soy abogado ni juez.

**Sr. Mertehikian.** – Le voy a responder sus dos preguntas.

Respecto de la primera pregunta debo señalar que el período que comprende es todo el período, es decir, antes de 1990, desde 1990 y hasta la actualidad. Le voy a explicar por qué. Con las situaciones anteriores a 1990, el Estado nacional le dio a YPF, transformada en sociedad anónima, una suerte de cláusula de indemnidad, porque se hace cargo de una parte de las contingencias judiciales que se puedan suscitar.

A partir de transformar YPF en sociedad anónima y durante toda la vida de YPF con Repsol adentro, no tenía ningún sentido demandar a Repsol autónomamente, porque Repsol era el accionista de control y por la sencilla razón de que la ley de sociedades establece que la sentencia dictada contra la sociedad hace cosa juzgada con respecto a los socios hasta su participación en el capital social, artículo 56 de la ley de sociedades. O sea que cuando yo obtengo una sentencia contra la sociedad equis, sociedad anónima, esa sentencia, según la ley argentina, hace cosa juzgada respecto de los accionistas hasta su responsabilidad social, que en un período determinado de la vida de YPF abarcaba más del 90 por ciento del capital accionario de la sociedad.

De manera que la situación que se verifica ahora es que la expropiación y, por lo tanto, la identificación de Repsol como un sujeto distinto de YPF, justifica precisamente –entendimos– la aplicación de la doctrina de la Corte Swift-Deltec.

Para finalizar la respuesta debo señalar que sí, al día de hoy, un juez ha entendido que esa situación es perfectamente identificable, que la doctrina de la Corte y la ley nos dan este argumento y ha entendido que codemandada también Repsol amplió la demanda y le hizo saber la medida cautelar.

A todo esto quiero aclarar que, además de YPF y –ahora– Repsol, están las otras tantísimas compañías que tramitan en cada jurisdicción.

No sé si le contesté su pregunta.

– *Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono..*

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Gracias, doctor.

Me quedan en la lista los senadores Pichetto, Solanas y Morales.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Mertehikian.** – Perdón, me perdí; discúlpeme.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Mertehikian.** – Lo voy a decir con toda claridad: hay pocas cosas que me resulten tan poco agradables como discrepar con el senador Fernández. Lo digo aquí delante de todos ustedes; pero desafortunadamente no opino como él.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Mertehikian.** – Le voy a decir por qué...

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Mertehikian.** – Hay pocas cosas en las que insisto en este proemio...

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Perdón, doctor, pero se encuentra en uso de la palabra el senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – ¿Qué quiere decir senador Morales? ¿Quiere decir algo?

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Mertehikian.** – Precisamente, el senador Fernández me estaba manifestando eso...

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Mertehikian.** – La ley de expropiación es claramente una norma reglamentaria del artículo 17 de la Constitución Nacional. Esta prevé todas las posibilidades, entre ellas: la existencia de un avenimiento expropiatorio –que, como dije antes, es un típico contrato de derecho público– o el proceso judicial expropiatorio, que es la respuesta necesaria del orden jurídico para que el Estado proceda al despojo constitucional de la propiedad privada.

Por lo que yo entiendo, aquí se expropia un bien mueble representado por un título que es la acción del capital social de la sociedad anónima, YPF; luego, el capital social de esa sociedad anónima está representado por acciones.

Entonces, si no recuerdo mal, según la ley de declaración de utilidad pública, lo que es sujeto expropiable, como bien, es el 51 por ciento del capital social de una empresa en funcionamiento.

Razón por lo cual, en mi opinión –y reitero que esta es una opinión, porque, como le manifesté, me desagrada discrepar con usted–, el bien mueble, representativo del capital social que se está expropiando, debe ser valuado correctamente.

Entonces, si el Tribunal de Tasaciones –al órgano que, como usted bien dijo, se remite la ley de expropiaciones, reglamentaria del artículo 17– no puede hacer esa valuación, porque no tiene los medios, o por la razón que fuere, y acude a otras opiniones, perfectamente puede hacerlo, porque la tarea del Tribunal es la de emitir un dictamen técnico.

Luego, ese dictamen técnico sustenta el monto del avenimiento expropiatorio si ha crecido un 10 por ciento, si se tratara de un bien inmueble –y la norma de expropiaciones no dice nada si se tratara de otro tipo de bienes–, o define si es el monto que el Estado debería depositar en un proceso judicial con el propósito de producir el despojo, o sea, la desposesión



en el proceso judicial.

Pero, finalmente, durante el proceso judicial, lo que hará el juez, si no lo hizo antes, es darle intervención al Tribunal. Por eso, si no hay coincidencia, la propia ley establece la designación de peritos por parte, y/o peritos de oficio, porque usted ya se libró del Tribunal para pasar a un procedimiento judicial en plenitud, donde el elemento Tribunal de Tasaciones puede ser un elemento, pero no el único. No sé si esto es claro.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

**Sr. Pichetto.** – ¿Me permite? Quiero referirme a este tema.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Pichetto.** – En realidad, con todo el respeto que tengo por el conocimiento intelectual del doctor Mertehikian, entiendo que los instrumentos que estamos tratando sanean esta discusión.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Presidente** (Fernández). – Quizás no lo escuchan.

**Sr. Pichetto.** – Sí, no me escuchan.

Reitero: los instrumentos y el proyecto de ley en tratamiento por esta Comisión conjunta de Presupuesto y Energía actúan como un elemento saneatorio de cualquier situación o de cualquier duda que pueda surgir en términos del acuerdo y del monto. Porque, en primer lugar, contamos con una ley de expropiación por el 51 por ciento y, luego, con un nuevo proyecto de ley que aprueba el acuerdo con una ratificación del propio Tribunal de Tasación que me voy a permitir leer –y esto figura en la elevación del proyecto de ley–. Dicha ratificación expresa, en forma clara, que el Ministerio de Economía y Finanzas emitió un informe especial, el cual se encuentra agregado, anexado del convenio, a través del que concluye que el valor a acordarse es justo y razonable a todos los efectos del avenimiento y solución amigable previstos en el convenio, y resulta consistente con los principios y bases de valoración aplicados por el Tribunal.

¿Qué quiero decir con esto? Que estamos frente a un acuerdo amigable. Y lo que estamos tratando a través de este proyecto de ley –que ponemos a la luz pública, de manera transparente y con un debate abierto– es el saneamiento de cualquier duda. Distinto sería si, por decreto, el Poder Ejecutivo hubiera implementado el acuerdo y lo hubiera llevado adelante.

Reitero, lo estamos tratando aquí en el ámbito del Senado y esta nueva ley –a la que se refería el senador Fernández–, desde mi punto de vista, actúa como saneamiento del avenimiento o del acuerdo amigable realizado por las partes con la ratificación de un precio realmente muy cercano –más allá de que ustedes disientan– por parte del Tribunal de tasación.

**Sr. Presidente** (Pereyra). – Tiene la palabra el senador Solanas pero antes está la interrupción solicitada por el senador Morales.

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Morales.** – No comparto esto que está planteando el senador Pichetto, ya que se encuentra en línea con la estrategia que comenzó a esgrimir el senador Fernández toda vez que nuestro planteo intenta impugnar la valuación del Tribunal de Tasaciones.

Como nosotros estamos impugnando, y discutiendo la valuación del Tribunal de Tasaciones, en línea con soslayar y quitarle la importancia jurídica que tiene la valuación de dicho Tribunal, vienen con este planteo de que el proyecto de ley sana cualquier situación anterior.

Por tal motivo, a continuación quiero leer dos o tres cositas. En primer lugar, en cuanto al proyecto de ley que envían dice: Decláranse cumplidos los objetivos del artículo 7

—que es la expropiación del 51 por ciento—, 11 y 12.

Ahora bien, con el fin de sanear, el texto del proyecto de ley tendría que decir otra cosa: Decláranse incumplidos los artículos 11 y 12 —si no vamos a sostener el dictamen del Tribunal de Tasaciones— y dispóngase el pago de 5 mil millones, porque es lo que hemos acordado y nos da la gana; es una decisión política.

Entonces, el texto de la ley de saneamiento tendría que decir eso, pero fíjense que todo el textual de la ley dice: declárase cumplido el objetivo. Y al doctor, que está opinando por la competencia que tiene en estos temas, en cuanto a los artículos 11 y 12, que se declaren cumplidos: el primero de ellos, declara que los procesos de expropiación estarán regidos por la ley 21.499 y actuará como expropiante el Poder Ejecutivo Nacional; y el 12, que establece un criterio para la determinación de bienes, dice: el precio de los bienes sujetos de expropiación se determinarán conforme a lo previsto en el artículo 10 y concordantes en la ley 21.499.

La tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Esto es lo que dice la ley y es el procedimiento elegido. Con lo que el texto que trae el Ejecutivo no sana nada. Por el contrario, dice: declárase cumplido el objetivo del 7, del 11 y del 12.

Es más, en el acuerdo, en el convenio amigable de solución, dice en los considerandos —el convenio que firma Repsol y que firmamos nosotros— que el artículo 11 de la ley, a su vez, estableció que los procesos de expropiación estarán regidos por la ley de expropiación. En los otros considerandos dice que el artículo 12 de la ley 26.741 ordenó que el precio de los bienes sujetos a expropiación se determinará a través del Tribunal de Tasaciones. Y en la parte de impositiva, en la cláusula 1º dice: en el marco de lo dispuesto por las leyes 21.499 —que es de expropiación— y la 26.741.

Es decir, no tiene un carácter de sanear nada, sino de reafirmar el camino seguido por la ley 26.741, que es el dictamen del Tribunal de Tasaciones. Por lo que es central el dictamen del Tribunal de Tasaciones. No estamos saneando nada. Por eso digo que el texto de la ley de saneamiento tiene que decir: “habiendo incumplido los artículos y definimos el precio que nos da la gana por decisión política”. No lo dice. Lo que han acordado con Repsol y el proyecto de ley ratifica la ley de expropiación, que es la ley 26.741.

Así que, volviendo al tema, digo esto para refutar la línea argumental que ahora acaba de tomar el presidente del bloque de Frente para la Victoria. Claro, porque es uno de los más vivos. Están viendo que nosotros estamos yendo a impugnar la valuación del Tribunal de Tasaciones y salen con la cuestión de la teoría del saneamiento.

Señor presidente: quiero con esto refutar el texto que escribe el propio Poder Ejecutivo y lo que está firmado en el acuerdo. Acá hay que cumplir con la ley. Así que dicho esto, queremos refutar entonces la teoría del saneamiento y acabamos de darles el texto. Díganle a la presidenta que, en todo caso, tendría que mandar el proyecto de ley de saneamiento para que sigamos hablando del Tribunal.

Con lo cual, vuelvo a preguntar. Doctor: en el marco de esta normativa que acabo de leer ¿cree que es central el dictamen del Tribunal de Tasaciones? Y de allí, habiendo avenimiento, lo que sí se puede convenir es que puede haber un pago de un 10 por ciento más del monto que determine el Tribunal de Tasaciones.

**Sr. Mertehtikian.** — Para hacérsela fácil y corta. En mi modesta opinión, la intervención de ese organismo es imprescindible.

**Sr. Morales.** — Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Pereyra).** — Tiene la palabra el senador Solanas.

— *El señor senador Solanas realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

— *El señor senador Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.*

**Sr. Solanas.** — Quiero volver a uno de los temas que usted tocó y que me parece que es interesante que retomemos. Obviamente que la jornada de hoy ha sido muy interesante por todas las derivaciones que tiene el tema tratado, pero lo que a nosotros nos preocupa es centrarnos en este convenio, en el que una de sus cláusulas, muy alarmantes –aparte del precio y todo lo que se está discutiendo–, es la indemnidad.

Usted sabe, doctor, que en asuntos de contaminación el daño no se verifica en el momento.

**Sr. Mertehikian.** — Es cierto.

**Sr. Solanas.** — Un accidente ferroviario o una caída de un edificio uno lo puede constatar más o menos en el momento o poco después. El daño ambiental se va descubriendo con el tiempo

**Sr. Mertehikian.** — Exactamente.

**Sr. Solanas.** — Y, a la vez, son daños que se producen generalmente –porque así es la explotación de los yacimientos– lejos de los centros urbanos, en lugares muy deshabitados, en el medio de desierto, etcétera.

Usted trajo a colación aquel fallo de la Corte Suprema, en una causa histórica, que deberíamos recordarla. Fue la causa donde actuó el juez Salvador María Lozada; me refiero a la causa “Swift-Deltec”. Las casas matrices –usted dice–, el grupo controlante, es siempre responsable.

**Sr. Mertehikian.** — Eso dije.

**Sr. Solanas.** — En aquel momento tenía que hacerse responsable de la quiebra fraudulenta de Swift-Deltec.

Esto es interesante porque fue un olvido grande que hubo cuando los bancos se quedaron con nuestros depósitos en 2002 y en lugar de obligar a las casas matrices a reponer el robo, se modificó la ley de quiebras para que no castigaran a los gerentes.

**Sr. Mertehikian.** — Soy víctima de ese proceso, así que lo conozco perfectamente.

**Sr. Solanas.** — Volviendo al tema, es muy preocupante este convenio. YPF se hará cargo de los pasivos difusos, los pasivos futuros que empecemos a descubrir, que van a ser enormes. Usted me acaba de dar un dato muy interesante y es que hubo 2.700 denuncias de las propias petroleras, a las que deberíamos sumar la enorme cantidad de denuncias de las comunidades afectadas.

Hay algo muy fácil de constatar, doctor –y es lo más grave de esto para mí–, que es la contaminación de las cuencas de agua potable en casi todos los yacimientos. Esto no va sólo para YPF- Repsol. Yo tengo testimonios concretos en varios de los yacimientos que he visitado. Por ejemplo, en General Mosconi y en Tartagal el agua es imposible de beber. El acrecentamiento de enfermedades como lupus, hepatitis, cánceres es notable en las estadísticas de esos hospitales. Ahora, ¿cómo va a ser la remediación, doctor? ¿Cuánto va a costar la remediación? ¿Hay cálculos?

Voy a recordar algo que leí ayer, que es que en junio de 2012 –no hace quince años– el Laboratorio de Toxicología de la Corte Suprema de la Nación confirmó que en el Lago Los Barreales, en Neuquén, las aguas contenían hidrocarburos 50 veces por encima del máximo permitido para realizar actividades acuáticas y que, además, las aguas no eran aptas para el consumo por la presencia de kerosene, gasoil, aceites y metales pesados. Detectó además hasta 15 mg de hidrocarburos por litro cuando el máximo autorizado es de 0,3 mg por litro. El Lago Los Barreales provee de agua a Cutral Co y a Plaza Huincul y se conecta con el Lago Mari Menuco, que provee de agua potable a la ciudad de Neuquén.

Es decir, esto pasa en las agüadas, en los pozos de agua de todos los yacimientos,

doctor. Yo tengo imágenes y lo he visto. Usted acerca un fósforo y flamea. Entonces, no es un tema liviano. Ojalá superemos posiciones sectarias y en aras del bien común defendamos el agua y la naturaleza por encima de ideologías o partidos.

Este convenio prevé hasta 600 millones de dólares, prevé YPF ante causas, prevé la indemnidad y abre el paraguas y coloca que puede gastar y, seguramente, podrá hacerse cargo de esto. Pero ayer hablábamos de las causas que Brasil tiene por el incumplimiento en la prohibición de gas de la usina de Uruguayana, ya hay un fallo en primera instancia en la Cámara de París por 1.050 millones de dólares, están los innumerables juicios que los estados norteamericanos tienen contra...

– *Varios señores senadores hablan a la vez.*

**Sr. Solanas.** – ¿En qué causa, en qué fallo? Estoy hablando de reclamos. Ayer lo dijo el ingeniero Alieto Guadagni: hay un fallo en primera instancia.

En definitiva, le pregunto, doctor Mertehikian: ¿ustedes tienen causas abiertas en las cinco cuencas?

**Sr. Mertehikian.** – Sí, señor.

**Sr. Solanas.** – ¿Cuál es el costo de remediación de la contaminación de estas aguas que no es nada sencillo?

**Sr. Mertehikian.** – No tenemos, al día de la fecha, forma de determinarlo. Es lo que quise explicar en mi exposición. Nosotros, para trabajar con seriedad este tema, no tenemos posibilidades ciertas al día de la fecha de definir cifras. Nosotros estamos reclamando comportamientos, conductas.

**Sr. Solanas.** – ¿Pero reconoce el hecho?

**Sr. Mertehikian.** – Nosotros reclamamos la resolución a su situación ambiental anterior de todos los episodios que nosotros hemos detectado más los que existan en poder de las autoridades de provincia. Y estamos requiriendo que se tomen las medidas para resolver hacia atrás y se tomen medidas para no repetir hacia adelante.

Si usted le pregunta a ASSUPA: ¿cuánto cuesta eso hoy? ASSUPA no está en condiciones de decirlo. ¿Por qué? Por aquello que quise explicar y, probablemente, no haya sido suficientemente claro. Primero por la dinámica, como usted lo acaba de decir, aquí hay situaciones que hoy no están visibles, ostensibles y van a aparecer luego y hay situaciones en las que la tecnología que se aplica puede hacer variar costos.

Con todo respeto le digo que estamos reclamando son conductas, comportamientos: donde corresponda que se reforeste, limpieza de cursos de agua donde eso se pueda hacer, limpieza de piletas mal cerradas donde sea necesario, construcción de plantas potabilizadoras de agua donde corresponda. Pero, repito, son comportamientos y conductas. Si eso significa 100, 500 o 5000, no estamos en condiciones de definirlo.

**Sr. Solanas.** – Le agradezco doctor. Pero queda claro para todos los senadores que no hay ninguna idea del costo de remediación porque no lo tiene ni el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Lo que es realmente irresponsable y grave, señores senadores es que el convenio comprende librar de cargo y culpa a la controladora de YPF durante todos estos años de lo que va a suceder en el futuro y nadie se hace cargo de esta remediación.

En definitiva, pateamos la pelota afuera de la cancha y seguimos viaje. Estamos ante un acto irresponsable, inadmisibles porque nadie tiene idea acá ni ha tasado ni ha hecho las auditorías del impacto del daño ambiental sobre los territorios y las poblaciones. Nada más. Muchas gracias.

**Sr. Presidente (Pereyra).** – Gracias, señor senador Solanas.

Se ha agotado la lista de oradores, han participado todos los que han propuesto tanto la mayoría como la minoría y absolutamente todos los bloques opositores con la libertad con

19.3.2014

Reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía  
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda

Pág. 33

---

la que lo debemos hacer y cada uno desde su forma de pensamiento con respecto a este convenio. Se pasa a la firma el dictamen y damos por finalizada la reunión.

– *Son las 15.*